

CAPÍTULO 1

CIVILIZACIÓN Y BARBARIE. EL ARRANQUE DEL PROYECTO OLIGARQUICO

A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, América latina no aparece muy cambiada con respecto a la época colonial: las ciudades, incluso las capitales, no difieren mucho de las que vieron el fin del proceso de independencia, y el tipo de vida sigue siendo esencialmente el mismo tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, esta imagen es parcialmente engañosa, ya que no toma en cuenta una serie de mutaciones de fondo aparecidas como secuela de la independencia, mutaciones importantes aunque no se manifesten todavía uniformemente en todas las áreas latinoamericanas.

Describir el período comprendido entre 1850 y 1880 presenta, por consiguiente, no pocas dificultades; una descripción adecuada de tal período debe mostrar una realidad histórica aparentemente contradictoria y evitar, en la medida de lo posible, reproducir la interpretación simplista imperante hasta nuestros días, que atribuye las novedades latinoamericanas de este período exclusivamente a la reactivación económica de la fachada atlántica europea.

Dicha reactivación económica de la Europa atlántica y la nueva inserción de América latina en la economía internacional no harán sino amplificar y reforzar, no sólo en el último tercio del siglo XIX, ciertos fenómenos que ya encontramos, de un modo incipiente, hacia 1850.

Entre 1850 y 1880, caracteriza a América latina la presencia de novedades en la continuidad. Los ejemplos son numerosos: el comerciante boliviano que se enriquece con la explotación de las minas de plata nos trae a la memoria, con bastante exactitud, la forma

en que amasaba su fortuna el comerciante del siglo XVIII, mediante el préstamo de mercancías y dinero a los pequeños productores mineros. También el propietario de una plantación de 1850 se asemeja bastante al de finales del siglo XVIII, que suele ser su bisabuelo cuando no su abuelo. La misma observación es aplicable a la élite política de índole liberal que salta a la palestra política en las décadas de los años cincuenta y sesenta y que nos hace evocar a las figuras más radicales de la época de la independencia, antes de que las sumergiera el refugio conservador que siguió a la victoria.

Esta semejanza entre tipos sociales pertenecientes a dos momentos históricos distintos nos da una idea de la profunda continuidad de la evolución histórica antes y después de 1850, pero es preciso observar asimismo que el comerciante, el propietario de una plantación y el político liberal de mediados de siglo poseen algo nuevo y distinto, algo de lo que sus abuelos y bisabuelos carecían. Existe en cada uno de ellos la neta conciencia de pertenecer a una clase llamada no sólo a dirigir la política, administrar la economía y dominar la sociedad, sino también a proponer a los diversos grupos sociales subalternos, en contraste con lo acaecido hasta entonces, un proyecto referente al futuro del propio país: la gran novedad de este período reside justamente en esta capacidad por parte de la clase dominante de obrar directamente como tal.

La renovada confianza en sí mismas que muestran las oligarquías proviene de que entre 1830 y 1850 habían logrado reabsorber, no sin dificultades, las contradicciones creadas por las guerras de independencia y la ruptura de la estructura política y administrativa colonial. Para alcanzar dicho fin, la oligarquía había recurrido a formas tradicionales de control social, económico y político, con lo que el progreso acabó beneficiando a los mismos grupos sociales que ejercían el poder, sin solución de continuidad, desde antes de la independencia política.

Así pues, el período 1850-1880 no se caracteriza por un nuevo orden, por el asentamiento de nuevas bases políticas, sociales y económicas, como intentaron hacer creer los liberales del siglo pasado; ni tampoco, como han procurado inculcarnos los historiadores, por una renovación impuesta desde el exterior, aunque sí es cierto que las condiciones de la economía internacional sirvieron para potenciar estímulos esencialmente de naturaleza interna.

El período 1850-1880 representa la fase inicial de la hegemonía

oligárquica, es decir, de una clase cuyos orígenes son coloniales, que basa su poder en el control de los factores productivos y que utiliza directamente el poder político para aumentar su dominación sobre las restantes capas sociales. Nos hallamos frente a una clase en fase ascendente, capaz de asumir su hegemonía y de minimizar las contradicciones que su dominio pueda generar. Ello significa que, pese a la existencia durante estos años de sublevaciones y revueltas por parte de los grupos subalternos y de tensiones en el seno de las mismas oligarquías, unas y otras pudieron ser superadas.

El título dado por el argentino Domingo Faustino Sarmiento a su libro *Civilización y barbarie* sintetiza a la perfección, según nuestro parecer, el significado histórico de este período.

LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

La carencia de estudios sobre el tema hace imposible un análisis global que permita determinar cómo y cuánto crecen el producto interior bruto y la renta nacional de las diversas economías latinoamericanas entre 1850 y 1880. Todos los análisis concuerdan en señalar, durante este período, un moderado incremento de las rentas nacionales, opuesto al substancial estancamiento económico que había caracterizado el período precedente.

El indicador generalmente utilizado para documentar la ~~reactivación económica posterior a 1850 es el de la expansión del comercio exterior~~. Pero dicha expansión no es uniforme en todas las economías; por un lado, es más rápida en las áreas atlánticas que en los países costeros del océano Pacífico; por el otro, se da con mayor intensidad en las áreas exportadoras de productos agrícolas de clima templado que en las exportadoras de productos de agricultura tropical. La existencia de distintos ritmos e intensidades en la expansión del comercio exterior nos mueve a interrogarnos sobre las condiciones que posibilitaron tal expansión en las diversas áreas latinoamericanas; nos preguntaremos, igualmente, en qué sectores productivos tiene lugar ésta y en qué medida implica, llegado el caso, a otros sectores económicos.

Toda reactivación económica habida en la edad contemporánea está asociada, en general, a una utilización distinta de los factores productivos ya existentes. Esta regla es válida también para la Amé-

rica latina de este período en que el aumento de las exportaciones —factor del que depende la reactivación económica— es directamente proporcional al desarrollo alcanzado por dos sectores productivos: el agrícola-ganadero y el minero.

En los análisis realizados sobre la expansión productiva de este período, el tema de los recursos productivos disponibles ha sido generalmente desatendido cuando, precisamente, reviste una especial importancia si se tiene en cuenta que su descubrimiento y utilización constituyen los fundamentos de la expansión productiva.

Advertimos que al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX el área ocupada económicamente sigue siendo, en conjunto, la misma que a finales del siglo XVIII, con la excepción de algunas regiones donde la presión demográfica había originado fenómenos de colonización interior y que, en definitiva, no dejan de ser casos esporádicos.

Lo que a partir de 1850 constituye una novedad es el intento de desplazar hacia el interior la frontera entre economía europea y economía no europea. Consideramos europea la que directa o indirectamente tiene que ver con la exportación, en tanto que la no europea está desprovista de todo vínculo, directo o indirecto, con la misma. Ejemplo de esta última podría ser la economía de los indios mapuches en Chile.

El desplazamiento de la frontera en beneficio del primer tipo de economía, hecho esencialmente nominal antes de 1850, se convierte en realidad a partir de esta fecha, cuando asistimos a un notable incremento del área geográfica económicamente productiva, el cual generalmente se logra eliminando a la población india que no se aviene a someterse y reabsorbiendo en el latifundio las formas de colonización interior surgidas durante el período precedente.

Ejemplos de ocupación del territorio mediante el etnocidio de las poblaciones indias son la llamada conquista del desierto en Argentina o la conquista de la Araucanía en Chile. La primera había empezado ya antes de 1850, durante el mandato de Rosas, y significó el paulatino ingreso en el área de economía europea de treinta millones de hectáreas, gran parte de las cuales acabaron en manos privadas, las de los estancieros, mientras que solamente una décima parte fueron destinadas a la creación de las colonias agrícolas que, según la ideología liberal de la época, habrían debido servir para poblar el país con la inmigración. Un fin semejante tuvo la zona sur de Chile ocupada por los indios mapuches. Como en Argentina, se

realizaron una serie de campañas militares para incorporar el territorio a la economía europea y a la economía de latifundio, destinándolo a la producción de trigo.

Tanto en Argentina como en Chile, la expansión de la economía europea se tradujo en una expansión de la vieja organización productiva agraria, es decir, de la estancia argentina y el fundo chileno, variantes nacionales del latifundio.

Tal fue el resultado obtenido mediante la progresiva subordinación de la colonización interior al latifundio. Este fenómeno, desgraciadamente poco conocido, está presente en muchas zonas de América latina. Lo observamos en toda su evidencia en México septentrional, donde chocan dos fronteras económicas: la estadounidense, fuertemente expansiva, y la mexicana, mucho más lenta. En la zona fronteriza bajo control político de México se produjo una inmigración proveniente de México central, iniciada ya en el siglo XVIII, que tras haber ocupado tierras libres dio origen a formas de pequeña y mediana propiedad, las cuales, en su mayoría, pasaron más tarde a depender del latifundio.

Un fenómeno de colonización, apoyado por la oligarquía y utilizado para el crecimiento del latifundio, tuvo lugar también en las áreas que a partir de 1880 resultarían afectadas por la inmigración europea. Se ha demostrado que en la región brasileña de São Paulo, la formación y la extensión del latifundio, carente son anteriores a la inmigración europea, y que ello se debe al aprovechamiento de una mano de obra esclava proveniente del nordeste tras la expulsión de los primitivos ocupantes precarios de la zona o su conversión en colonos.

Se ha sostenido que el proceso de independencia provocó, pese a la existencia de los ejércitos beligerantes, movimientos de población hacia regiones menos habitadas o no ocupadas económicamente, con lo que dichos desplazamientos proporcionaron al latifundio mano de obra y espacio que cultivar. El latifundio, a su vez, actuó como elemento de control social y político sobre el excedente demográfico, regulando su inserción o dejándolo en posición de ocupante precario. Las numerosas disposiciones concernientes a los vagabundos y personas desprovistas del llamado «pasaporte» —documento expedido por el patrón, que las autoridades locales podían exigir, con derecho a enrolar en el ejército o en el latifundio a quienes carecieran de él— empiezan a perder fuerza durante el último tercio del siglo XIX, una

vez consolidado el papel hegemónico del latifundio dentro de la producción.

La expansión del latifundio, aun cuando primordialmente se debió a la necesidad por parte de la clase dominante de impedir que el excedente demográfico producido por el aumento de población se apropiase de los factores productivos, fue favorecida por la reactivación de las exportaciones y por las ordenanzas gubernamentales. El hecho de que la oligarquía, clase dominante, se sintiera propietaria *de facto*—sin que le fueran indispensables los títulos legales—del factor productivo «tierra» nos indica que en América latina la posesión de la tierra constituía, siempre y doquiera, el factor fundamental de sus ingresos, su poder y su prestigio.

Sin embargo, los medios empleados por la oligarquía para extender su poder sobre la tierra y los hombres no se limitan a la toma de posesión de tierras todavía no ocupadas económicamente. Los ejemplos dados hasta aquí se refieren a zonas que por comodidad podemos llamar «de frontera abierta», en el sentido de que son tierras ocupadas por una población india no campesina. Pero la extensión del latifundio se produjo también en aquellas zonas en que, si bien existía ya, presentaba formas que se tenían por «anticuadas», como en el caso del latifundio de la Iglesia en México central o en Colombia. En estos países, el latifundio eclesiástico había adquirido proporciones desmesuradas; además, las órdenes y congregaciones religiosas habían logrado apropiarse, mediante la difusión de las hipotecas, de una parte de las rentas del suelo. La explotación de bienes de la Iglesia favoreció el latifundio no sólo directamente—por el incremento cuantitativo que significó—, sino también indirectamente, ya que cuando las hipotecas pasaron a poder del estado, los hacendados obtuvieron, en un primer tiempo, una reducción de los tipos de interés, y más tarde, la redención de la deuda por un valor inferior al nominal. La estrecha relación entre clase dominante y conducción del estado contribuía así a extender el latifundio; al apropiarse los bienes de la Iglesia, la oligarquía consolidaba y amplía su base material.

Aún existe una última vía por la que el latifundio ganó terreno, propia de las zonas donde éste coexistía con la propiedad campesina o comunitaria. En dichas zonas, de las que hay ejemplos en práctica semente todos los países, la propiedad campesina o comunitaria se había ido configurando en el pasado como elemento complementario

del latifundio. Entre el latifundio y la pequeña propiedad, y entre el latifundio y las comunidades indias, se había creado un fenómeno de ósmosis y de integración, por cuanto de la supervivencia de uno dependía la supervivencia de las otras dos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo a partir de 1870, esta relación de complementariedad entre latifundio y pequeña propiedad, y entre latifundio y comunidades indias, tiende a desaparecer como consecuencia de las medidas de racionalización del latifundio, orientadas por una parte a reducir la relación entre unidades de tierra poseídas y tierras económicamente productivas, y por otra parte a descargar al máximo los costes de mantenimiento de la mano de obra sobre las unidades productivas campesinas. El punto en torno al cual se agudiza cada vez más el conflicto entre economía del latifundio y economía campesina es el problema del control del agua, de especial importancia para las unidades productivas campesinas, que utilizan intensivamente los factores de producción.

Debe atribuirse al nuevo papel que asume el latifundio en este período la masiva apropiación de las tierras comunitarias indias por parte de las haciendas. Dicho fenómeno alcanzará su apogeo una vez agotadas las posibilidades de hacer que el latifundio crezca sin destruir la economía campesina, es decir, después de 1880.

En conclusión, resulta claro que el fenómeno de la progresiva extensión del área económicamente aprovechada por la agricultura y la ganadería es el fenómeno central, el mecanismo subyacente a la producción. También resulta claro que esta extensión del área agrícola se obtiene gracias a mecanismos de tipo tradicional—los mismos que entre los siglos XVI y XVIII propiciaron el desarrollo del latifundio—, que no suponen un factor moderno ni modernizante, ya que se basan en la coerción y en la posibilidad de aumentar la plusvalía mediante una presión ulterior sobre la productividad absoluta.

La situación es casi idéntica en lo que se refiere a los recursos productivos para actividades distintas a la agricultura, especialmente la minería. La producción minera, más afectada por las guerras de la independencia que ninguna otra a causa de su concentración en unas pocas y no muy extensas áreas geográficas, arranca de nuevo a finales de los años cuarenta gracias al restablecimiento de los mecanismos tradicionales. La declaración de nuevos filones continuó tramitándose según el procedimiento colonial, y la actividad minera siguió basándose en los pequeños productores ligados al comerciante por los

anticipos de bienes y, en ocasiones, de dinero (habilitación o avío), personajes ambos cuyos orígenes, como es sabido, se remontan a la época colonial.

Durante el segundo tercio del siglo XIX se producen algunos cambios. El usufructo de las minas, que el estado ceda a particulares siempre y cuando pagaran determinados derechos calculados sobre el mineral extraído, tiende gradualmente a desplazarse de la producción a la comercialización. Dicho de otro modo, el estado comienza a mostrarse indiferente con respecto a las cantidades producidas, interesándose en cambio por las exportadas.

Para la exportación del guano en Perú, que alcanza su punto culminante en este período, el estado concede a determinadas sociedades —la sociedad Dreyfus, por ejemplo— una concesión que les permite comercializar una determinada cantidad de guano en determinados mercados y por un lapso de tiempo fijo de antemano. A cambio de dicha concesión, la firma se compromete a pagar al estado una cantidad previamente estipulada. Observamos el mismo fenómeno en Bolivia, aplicado a la producción de la plata, con la diferencia de que en este caso no existe concesión a tal o cual sociedad, sino que todas ellas se comprometen a pagar determinada cantidad al erario público por cada unidad de plata que exporten. Algo semejante ocurrirá con la producción de nitrato, que iba a iniciarse en la década de 1870.

Estos cambios habidos en la forma de apropiación de los recursos naturales nos indican que dicha apropiación se ha acelerado: al configurarse como clase dominante, la oligarquía monopoliza todos los recursos mineros que en la época colonial podían registrar a su nombre personas no incluidas en ella.

Las consecuencias de la monopolización de los recursos naturales por parte de la oligarquía fueron numerosas. Durante el segundo tercio del siglo XIX, un número bastante reducido de sociedades mineras —formadas, en su mayoría, con el capital proveniente del comercio y del latifundio— fue concentrando en sus manos la producción más rentable. Así ocurrió con la plata en Bolivia y en México, con el cobre en Chile, y con el nitrato, que en dicho período pertenecía a Bolivia y Perú.

Esta concentración en pocas manos —o, mejor dicho, en pocas sociedades— de la producción minera existente significó sólo la concentración de la propiedad sobre los recursos naturales y la mano de

obra empleada. No se produjeron innovaciones técnicas apreciables: tanto en el caso de la plata boliviana como en el de la mexicana de Guanajuato, la técnica predominante fue, al igual que en los tiempos coloniales, la de la amalgama, mezcla de plata y mercurio para provocar la precipitación de la plata. Es preciso señalar, sin embargo, que existe la posibilidad de que las sociedades mineras, al haber alcanzado una gran solidez, consiguieran aplicar economías de escala y obtuvieran así un ahorro substancial en aquellos productos que, como el mercurio, el hierro o la sal, compraban en el mercado.

De cuanto hasta aquí hemos dicho sobre los recursos naturales integrados en las unidades productivas de tipo minero o agrícola (haciendas, *fazendas*, plantaciones), dos características destacan de modo bastante evidente: una de ellas —llamémosla tradicional— que nos remite a un pasado al que por comodidad calificaremos de colonial, y la otra —llamémosla moderna— basada en la nueva dimensión adquirida por la clase dominante tras la independencia, cuando su desahorro ya no es frenado en la época colonial.

El aspecto tradicional de la estructura productiva consiste en la supervivencia de los mecanismos coloniales de apropiación de los recursos naturales y en la actitud coercitiva frente a la mano de obra. El aspecto moderno estriba en la gestión de las unidades productivas, dedicadas a suministrar la máxima cantidad de bienes susceptibles de comercialización sin alterar por ello su propio equilibrio interno. De este modo, tradicionalismo y modernidad se asocian, y el resultado de su enlace no es ni modernidad ni tradicionalismo, sino el simple y necesario ajuste de la estructura productiva para superar la larga depresión que había sufrido antes de 1850.

Mediante dicha gestión de la unidad productiva, la clase propietaria alcanzaba su objetivo esencial: obtener mayores ingresos monetarios sin efectuar desembolsos monetarios, es decir, sin recurrir a inversiones de capital. En términos marxianos, se puede decir que la estructura productiva agrícola y minera seguía siendo el reino de la producción absoluta.

Si la apropiación y la explotación de los recursos naturales se realizaron tal como hemos intentado mostrar, una de las causas —no la única— fue la existencia de factores sociales y políticos que dispensaban de la necesidad de efectuar verdaderas inversiones de fondos. En la agricultura y en la ganadería presenciábamos un proceso productivo que no exige inversiones fijas, mientras que en la mine-

ría, las inversiones fijas se presentaban como el excedente de un ciclo productivo no susceptible de traducirse en ingresos monetarios.

La consecuencia de este tipo de utilización de los recursos naturales y la mano de obra es la producción de cuantiosos ingresos monetarios, que corresponden a la diferencia que media entre los desembolsos monetarios y las entradas monetarias; como ya hemos apuntado, no hay inversiones de fondos propiamente dichas. Con otras palabras, al terminar el año agrícola y el año minero, y debido a la existencia de los mecanismos más arriba descritos, la clase propietaria se encuentra en posesión de unos ingresos que tienden a superar los del año anterior. Una vez descontado de estos ingresos el importe necesario para los diversos consumos, queda una suma considerable, susceptible de ser ahorrada o invertida.

Así pues, el sector primario, tanto el que se orienta hacia la exportación como el dirigido hacia el exiguo mercado interior, se halla entre 1850 y 1870 en estado de producir un volumen de ingresos con posibilidades de acumulación, tal y como había ocurrido ya en el siglo XVIII. Lo que ha cambiado con respecto a la época colonial es que los ingresos son ahora cuantitativamente superiores y —tal vez— se concentran en manos de un número más limitado de personas.

Pero si la acumulación de capital tiende a ser más importante que en la época colonial, no se comprende entonces por qué a partir de 1860 ~~comienza la penetración del capital inglés~~. Todo cuanto hemos expuesto parece contradicho por este fenómeno, tantas veces tratado por los historiadores, y por la rapidez con que durante la segunda mitad del siglo XIX sobreviene esta efectiva colonización de América latina por parte del capital inglés, de la que derivan no pocas consecuencias económicas, sociales y políticas. Se trata, sin embargo, de una contradicción sólo aparente.

Si nos fijamos en la expansión de las inversiones inglesas, nos ~~apercibimos de su lentitud hasta 1860~~. La aceleración tiene lugar después de esta fecha, y los capitales se invierten en sectores económicos nuevos, inexistentes hasta entonces en América latina.

Ahora bien, lo cierto es que durante el período que estudiamos en este capítulo la expansión del capital inglés tuvo que afrontar no pocas dificultades, y sólo logró salvarlas mediante su inserción en sectores económicos distintos a los que existían antes de su llegada y que, en cualquier caso, no tenían nada que ver con los sectores

productivos; éstos fueron el comercio, los transportes y las finanzas, es decir, aquellos sectores en los que la dominación económica de la oligarquía era muy débil o lisa y llanamente nula.

Una prueba de nuestra afirmación la proporciona el hecho de que los primeros bancos que surgen en América latina sin quebrar en el curso de los dos o tres primeros años son bancos ingleses, no nacionales. El empeño que manifiestan los estados latinoamericanos por la creación de bancos estatales nos indica, justamente, que las oligarquías no consideraban la gestión directa del sector financiero como parte integrante de sus intereses. Sólo de 1880 en adelante cambiará el punto de vista; entonces, las oligarquías se darán cuenta de que el control del sector bancario puede ser un elemento de gran importancia para incrementar aún más sus ingresos monetarios e intentarán recuperar el tiempo perdido.

Dicho de otro modo, en el momento en que el capital inglés inicia el proceso de penetración en las economías latinoamericanas, la clase dominante de cada país posee el control casi absoluto de los ~~recursos naturales y de la mano de obra del sector productivo~~; por consiguiente, al capital inglés no le queda durante esta fase otra ~~opción sino la de apoyar a la oligarquía procurando no entrar en conflicto con ella~~. Por otra parte, a los mismos capitalistas ingleses les preocupaba más la rentabilidad de su dinero que el poder político o social a que podía dar lugar, de forma que el capital inglés se concentró en sectores que, pese a proporcionar considerables beneficios, quedaban fuera del campo de acción de la oligarquía, ~~que no disponía de la tecnología ni de los conocimientos necesarios para desarrollarlos~~. Ocurrió, pues, que en la práctica empezó a verificarse hasta qué punto el dominio oligárquico sobre la producción y el dominio inglés sobre el comercio y las finanzas se completaban mutuamente; ello constituyó el primer esbozo de lo que podemos definir como alianza imperialista entre el capital inglés y las oligarquías latinoamericanas.

Por lo tanto, el factor productivo «capital» tuvo, a lo largo del segundo tercio del siglo XIX, un carácter complementario con respecto a los factores «recursos naturales» y «recursos humanos». De hecho, el primero explica parcialmente el desarrollo de la comercialización —sobre todo internacional— y del sector financiero, pero no sirve para explicar el incremento de la producción agropecuaria y minera que, según hemos intentado mostrar, se explica esencialmente por

mecanismos como el control de los recursos naturales y de la mano de obra. No cabe duda que al capital le habría correspondido un papel más importante si la oligarquía no hubiese sido la clase dominante también desde los puntos de vista social y político.

Al analizar la penetración del capital inglés, existe la tendencia a ver en este proceso un fenómeno de gran rapidez cuyos factores externos—ingleses e internacionales—constituyen el único elemento activo, mientras que se niega todo dinamismo a los factores internos, específicamente latinoamericanos, como por ejemplo la existencia de una acumulación de ingresos en las manos de la oligarquía. Esta visión nos parece sumamente parcial, ya que un mínimo conocimiento de la evolución económica de Gran Bretaña en el mismo período basta para hacernos saber que la oferta de capitales en el mercado monetario de Londres es inferior a la demanda internacional y nacional, y que América latina constituye, a fin de cuentas, un área de interés secundario para el capital inglés.

Nuestra conclusión es, en consecuencia, que el capital inglés habría hecho escasos progresos en América latina de haber contado con sus exclusivas fuerzas. Su empuje no resulta sólo de la cantidad de libras esterlinas que está dispuesto a invertir, sino del hecho de poseer algo que despierta el interés de la clase dominante. Este algo es la tecnología, en la que la clase oligárquica ve un elemento susceptible de multiplicar sus ingresos monetarios sin que peligre su control de los factores productivos integrables en las unidades productivas. En este sentido, el ferrocarril constituye para la oligarquía la imagen más sugestiva de la capacidad tecnológica que posee el capital inglés, y ejerce sobre ella una fascinación completada por los tranvías, los barcos a vapor y los bancos, con sus complicadas operaciones.

Para la oligarquía, el problema de los años setenta se planteaba en los términos siguientes: ¿estaba o no en condiciones de ceder una parte de los ingresos acumulados por ella en las décadas precedentes, con el fin de atraer al capital inglés y su tecnología, y obtener a medio plazo un incremento de los ingresos? La respuesta dada a este interrogante llevó a establecer una serie de vínculos con el capital inglés, pero no sin tomar disposiciones para impedir que la posición hegemónica de las oligarquías quedara amenazada.

LA NUEVA INSERCIÓN DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

El análisis que hemos efectuado en el apartado anterior se ponía evidenciar que cuando en la segunda mitad del siglo XIX se inició una expansión de las exportaciones latinoamericanas, no sólo existían ya los mecanismos capaces de apuntalarla durante todo el período 1860-1914, sino que dicha expansión no constituía un fenómeno portador de trastornos radicales para el *status quo* económico—y no exclusivamente el económico—preexistente. Lo que podríamos llamar las estructuras de recepción de factores externos estaban ya lo suficientemente engrasadas como para hacer que el estímulo no fuera en vano.

Numerosos historiadores, engañados sin duda por las formulaciones brillantes y a veces aparentemente lógicas de los economistas, han sostenido que ya en la década de 1860 existía una especialización de las diversas áreas de América latina en cuanto a los productos exportados. En substancia, señalan tres grupos de países exportadores de bienes primarios: los de clima templado, que exportan cereales y ganado; los de clima tropical, cuya exportación se basa en la agricultura tropical; y los países ricos en bienes mineros y exportadores de los mismos. Sin embargo, esta especialización existía ya, en cierto modo, un siglo antes, y constituye una característica secular de las economías latinoamericanas. Y la preferencia de la economía occidental por las áreas mineras y por las que la abastecían en cereales y ganado—productos en los que Europa occidental no era autosuficiente—no se consolidará hasta después de 1880, y por consiguiente no caracteriza tampoco el período que estamos analizando.

La peculiaridad principal de estos primeros treinta años de expansión de las exportaciones es quizá la de significar un período de prueba para las mercancías latinoamericanas. Durante esta fase, las diversas áreas de América latina cambian su modo de inserción en la economía internacional. Precisamente porque se trata de una fase de formación se observan fuertes incrementos de las exportaciones seguidos, a veces, de recesiones igualmente rápidas.

Se puede encontrar un ejemplo típico de lo que decimos en la exportación de trigo realizada por Chile. La economía chilena de los años ochenta puede ser clasificada entre las exportadoras de produc-

tos mineros, pero no así la de los años sesenta, cuando las exportaciones de Chile se basaban ante todo en el trigo. El ciclo de las exportaciones de trigo chileno es de breve duración, y su ocaso coincide con el rápido desarrollo de las exportaciones de cereales por parte de Argentina.

Estas últimas constituyen otro ejemplo de cuanto afirmamos referente al nuevo modo de inserción de las economías latinoamericanas en el concierto internacional. En 1840, las exportaciones fundamentales de Argentina seguían siendo los cueros y la carne seca (*charqui*) o salada (*tasajo*). En definitiva, constaban de las mismas mercancías —a excepción de la plata— que a finales del siglo XVIII, si bien su volumen total se había acrecentado notablemente. Poco después, en cambio, dentro de un sector productivo ya existente —la ganadería— se produce una mutación: el desarrollo del ganado ovino. Y es mediante el aumento de las exportaciones de lana (7.600 toneladas en 1850, 17.300 en 1860 y 70.000 en 1870) como la economía argentina —y también la uruguaya— efectúa su nueva inserción en la economía internacional. Ahora bien, mientras que para Argentina la fase de exportación de lana terminará pronto —alrededor de 1880—, para Uruguay la lana todavía seguirá constituyendo el principal producto exportado a principios del siglo XX.

También en el caso de la economía del Brasil asintimos entre 1850 y 1880 a un cambio en el contenido de las exportaciones: la caída del azúcar y el algodón contrasta con el progreso de las exportaciones de café.

En todas las áreas agrícolas se producen variaciones en cuanto a las principales mercancías exportadas: en Venezuela, retroceso del cacao y expansión del café; en Cuba, el nuevo equilibrio que se instaura después de la guerra de los Diez Años favorece la extensión de la caña de azúcar.

Distinta es la situación que se observa en los países exportadores de productos mineros. Se asiste en ellos a una reactivación generalizada que afecta a todas las zonas que en la época colonial habían exportado metales, preciosos o no. Bolivia reanuda la exportación de plata, aun cuando en esta ocasión no proveniga, como antaño, de Potosí; lo mismo hace Chile con la plata y el cobre, México con la plata y Cuba con el cobre. La única novedad en este campo consiste en la exportación del guano de la costa del Perú hasta los años setenta, cuando toma el relevo el nitrato proveniente de las provincias

de Arica y Antofagasta, caídas en poder de Chile tras la guerra del Pacífico.

Esta breve geografía de la producción, o mejor dicho, la serie de transformaciones que sufre la geografía de la producción en el transcurso del segundo tercio del siglo XIX, nos ayuda a comprender que para llegar a esta nueva inserción de las economías latinoamericanas en la economía internacional no hacía falta una renovación a fondo de la estructura productiva: así, por ejemplo, donde se criaba ganado vacuno se podía, sin grandes modificaciones, criar ganado lanar.

Este proceso de reconversión, repetimos, no encontró obstáculos estructurales insuperables gracias a adaptarse perfectamente a la organización productiva que ya existía. Sin embargo, algunos productos presentaron dificultades, debidas en ocasiones a la circunstancia de que la reconversión precisaba mayor cantidad de mano de obra, como fue el caso —ciertamente excepcional— de la producción del guano, que obligó a importarla.

La clase dominante, por sí misma o en estrecha colaboración con el capital inglés, fue capaz de superar los obstáculos. Ello significa que las oligarquías poseían el dinamismo necesario para no dejarse doblegar fácilmente. En el caso concreto de la producción del guano en el Perú, la oligarquía solucionó el problema con la importación de mano de obra china en calidad de *indentured servants*, es decir, personas que reembolsaban el precio del billete con una determinada cantidad de jornadas laborales. El mismo mecanismo proporcionó la mano de obra necesaria para las plantaciones azucareras de Cuba, a donde fueron llevados indios de Yucatán.

Otros mecanismos fueron también puestos en práctica para superar las dificultades planteadas por la reconversión productiva y la puesta en marcha de una nueva producción exportable. Uno de ellos, el más conocido, es la creación de áreas de colonización en países como Argentina, Brasil y Uruguay, pobladas por inmigrantes de la Europa centroseptentrional en un primer tiempo, y mediterránea a continuación.

Las dificultades, como hemos intentado mostrar, nacen de la imposibilidad casi absoluta de desplazar mano de obra de una región a otra, aun en el interior de un mismo país. Esta dificultad nos ayuda a comprender que no existe un mercado de trabajo efectivo que funcione a escala nacional o regional. De ahí que entre 1850 y 1880

la mano de obra todavía carezca —como a principios del siglo XIX— de la movilidad que, como es sabido, constituye una de las características de toda economía capitalista incipiente.

Así pues, la mano de obra podía representar un freno para el proceso en cuestión, como podía representarlo asimismo una utilización limitada de los recursos productivos naturales. Para impedir que la nueva inserción de las economías latinoamericanas en el mercado internacional disminuyera el control oligárquico sobre la estructura productiva, se realizó dicha inserción mediante reajustes parciales de la estructura productiva preexistente, y no —como ha sido generalmente admitido— mediante una superación de la misma. Esta característica fundamental se encuentra también, como hemos mostrado, en el plano de la geografía de la producción.

Al identificar las modificaciones económicas propias del segundo tercio del siglo XIX y la relación que guardan con la estructura productiva preexistente hemos cumplido en parte nuestro propósito central, el de evaluar qué novedades efectivas tienen lugar en la producción durante este período. La dinámica del proceso de transformación productiva nos puede ayudar a comprenderlas mejor.

Las informaciones de que disponemos autorizan a concluir que la producción aumentó, tanto en volumen como en valor, entre 1850 y 1875, es decir, antes del comienzo de la gran depresión que afectó a la economía inglesa y, de rechazo, aminó —aunque sin llegar a frenarla— la expansión productiva latinoamericana.

La expansión de la producción y el aumento de los precios de las materias primas, que iban a durar hasta 1875 aproximadamente, fueron mayores para los productos de la agricultura de clima templado, especialmente para los cereales. Gracias al incremento general de los precios de las materias primas iba a resultar posible, en un segundo momento, la expansión física de la producción.

Todo cuanto hemos dicho hasta aquí aparecerá con mayor claridad si analizamos la evolución de los precios y de las cantidades producidas. El caso de la plata, mercancía importante para más de un país latinoamericano, es significativo: tras el estancamiento sufrido entre 1830 y 1852, su precio aumenta hasta 62 peniques la onza entre 1852 y 1862. A continuación, se estabiliza en 60 peniques hasta 1870, y baja a 50 peniques la onza entre 1870 y 1880. Esta evolución de los precios provocó, en Bolivia, un incremento de la producción, que de 10 millones de onzas en el quinquenio 1845-1849 pasó a 15 mi-

llones en 1865-1869, 20 millones entre 1870-1874 y 30 millones en 1880-1884. Similares son los casos de México y Chile, los otros grandes productores de plata.

También los productos agrícolas registran un rápido aumento de las exportaciones. Las de tabaco colombiano, casi inexistentes hacia 1840, se multiplican por seis entre 1850 y 1870, para estabilizarse después, cuando aparece en el comercio internacional el tabaco de Java, bastante más barato.

El mismo fenómeno se repite para un producto como el café brasileño, cuyas cotizaciones, tras conocer una tendencia decreciente hasta los años 1847-1850, empiezan a subir, y pasan de 1,13 libras esterlinas en 1850 a 3,80 en 1888. Esta alza provocó tal expansión productiva ulterior que en los años ochenta las exportaciones de café por parte del Brasil superaban los 5,5 millones de sacos de 60 kilos cada uno.

La subida de precios que disfrutaron los artículos latinoamericanos solicitados por el mercado internacional no fue contrarrestada hasta aproximadamente 1880 por una subida correspondiente de los precios de los productos industriales importados. Este fenómeno, sumado al hecho de que las exportaciones aumentaron más que las importaciones, se tradujo en una sensible mejora de la relación de intercambio, hasta tal punto que la balanza comercial arrojó saldos positivos.

Los años comprendidos entre 1850 y 1880 se revelan, pues, extraordinariamente positivos para las economías latinoamericanas. Esta evolución positiva es la que explica por qué la clase dominante, al aceptar la nueva inserción —a través de mercancías distintas a las precedentes— de América latina en la economía internacional, consiguió un aumento substancial de sus ingresos. El que este período fuera positivo para las economías latinoamericanas —o, mejor dicho, para la clase oligárquica— no significa, sin embargo, que se produjese un cambio en la relación asimétrica que unía a las economías latinoamericanas con la europea, y en especial que la clase hegemónica no logra sacar todo el provecho posible del alza total de los precios en el mercado internacional, porque una parte queda siempre en manos del intermediario inglés.

Si de algún modo pudiéramos cuantificar y representar en un gráfico el crecimiento de la producción total latinoamericana, obtendríamos una figura sinusoidal. Si fuera posible distinguir entre la

producción destinada al mercado interior y la destinada a la exportación, el nuevo gráfico mostraría un aumento muy rápido de la segunda y otro sumamente lento de la primera. En este sentido, el período que analizamos puede ser definido —y así lo ha sido— como de crecimiento hacia el exterior, es decir, un período en el que el incremento de las exportaciones sirve de base para el desarrollo económico. La definición de «crecimiento hacia el exterior» para caracterizar el período que termina en 1930 fue formulada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en los años cincuenta de nuestro siglo, y lleva aparejada una connotación negativa, ya que se trata de todo lo contrario de lo que querían los economistas de la agencia de las Naciones Unidas, que propugnaban un crecimiento basado en el mercado interior, con el sector industrial como elemento central.

La excesiva insistencia en la producción exportable ha ocultado las dimensiones del mercado interior y la acción ejercida sobre él por el aumento de la cantidad de mercancías importadas. Se ha afirmado, por ejemplo, que el progreso de las exportaciones acarreo la ruina del artesanado, que había logrado sobrevivir tras la total libertad y descentralización del comercio en la fase inicial de la lucha por la independencia. Dicho aserto se basa esencialmente en que el incremento de las importaciones —inferior, insistimos, al de las exportaciones— se registra sobre todo en el sector textil, pero olvida que los tejidos importados, dado el estancamiento de la capacidad adquisitiva de los estratos populares, sólo podían adquirirlos la clase dominante y los miembros de la burocracia estrechamente ligada a su poder.

El ejemplo del artesanado nos muestra cómo un indicador de índole externa —en este caso las importaciones— puede dar lugar a errores de cierta importancia. Subrayamos de nuevo que para ninguna zona de América latina disponemos de estudios suficientes sobre la producción no exportada, pero es nuestra opinión que su volumen no debió de disminuir.

En cuanto a los efectos inducidos por la producción destinada al mercado exterior, su alcance fue muy reducido. Ello no debe atribuirse a la difusión y victoria del liberalismo en materia arancelaria y a la falta de protección hacia las industrias nacionales. A nuestro entender, los efectos positivos que la expansión de las exportaciones podía inducir en la sociedad quedaron frustrados por la fuerte con-

centración de la renta nacional en pocas manos: cuanto más concentrada está la renta, menos se dejan sentir dichos efectos, ya que la mayor parte de la población no recibe beneficio alguno del incremento productivo y, por consiguiente, no aumentan sus ingresos ni su nivel de consumo.

MERCADO INTERNACIONAL Y MERCADO NACIONAL

En los apartados que preceden hemos dicho que hay que relacionar los progresos en la producción con la expansión del latifundio, de la minería y de la demanda internacional, la proveniente de la Europa atlántica sobre todo.

A este respecto, lo que diferencia el período 1850-1880 del siguiente es que, en el primero, el aumento de las exportaciones no va acompañado por un aumento de las importaciones comparable. Gracias a ello, las balanzas comerciales latinoamericanas de estos años arrojan saldos activos, y las economías de los distintos países se hallan en condiciones de autofinanciar un proceso de modernización de los sectores económicos que aseguran el aumento constante de los ingresos monetarios de las oligarquías.

Pero si adoptamos la perspectiva de la balanza comercial cortemos el riesgo de no ver que los efectos provocados por el incremento de las exportaciones tuvieron un alcance limitado, como hemos mostrado en el apartado anterior.

Dicho punto —que a nuestro entender constituye el centro de la cuestión— debe ser analizado en un contexto más vasto, sin perder de vista las características de los mercados nacional e internacional que regulan la acción innovadora del empresario.

Cuando adviene la expansión productiva, el mercado nacional todavía no existe en América latina, por lo que la reacción de las diversas regiones exportadoras no es la misma: por ejemplo, el aumento de la demanda de lana, que conlleva a las economías argentina y uruguaya, acaba afectando sólo a unas cuantas regiones y no al entero territorio de los dos países.

La inexistencia de mercados nacionales queda probada por la total autonomía con que los precios de un mismo producto sufren variaciones en los distintos estados del proceso mercantil. El caso del cobre chileno, cuyo precio evoluciona de un modo en la zona

un intercambio desigual es un hecho limitado, ya que a medida que la colonización progresa, el comerciante-usurero tiende a desaparecer.

La desaparición del comerciante-usurero, o mejor dicho, su progresivo apartamiento de los principales circuitos mercantiles, se explica por la gradual penetración de los representantes de las grandes compañías en las áreas productivas. Al parecer, la causa hay que buscarla en el proceso de concentración de los recursos productivos que, como hemos visto, distingue a este período.

En efecto, de 1850 a 1880 la expansión de las grandes unidades productivas agrícolas y mineras hace que la exportación dependa cada vez más de ellas, mientras que las pequeñas o comunitarias tienden a ser marginadas. La rapidez del índice de crecimiento de las exportaciones no hace sino estimular dicha expansión. La producción y la comercialización, hasta entonces estrechamente controladas por el hacendado o por la gran empresa minera, acaban formando dos campos bien diferenciados. La clase productora no se halla ya en condiciones, como antes, de aprovecharse de la coyuntura; ésta, que depende ahora de las fluctuaciones más o menos acusadas del mercado internacional, exige el dominio de una técnica mercantil, la disposición de una infraestructura de almacenes y la capacidad de operar al mismo tiempo en distintos mercados nacionales e internacionales. La separación entre actividad productiva y actividad comercial, favorecida por la creciente tendencia de la clase productora al absentismo, se consumó y generalizó durante este período. Así quedaron creadas las condiciones previas para el rápido avance de la vía férrea, que tendrá lugar a partir de 1880.

Por lo demás, la relación entre las clases productora y mercantil eliminará —salvo en las zonas poco afectadas por el auge de las exportaciones— los mecanismos residuales de intercambio desigual en los tratos a gran escala, pero no en las operaciones efectuadas por agentes económicos de importancia menor.

Los efectos de la estrecha relación entre grandes productores y grandes comerciantes fueron considerables, sobre todo en lo que se refiere a la comercialización de la pequeña producción. Sólo los grandes propietarios se beneficiaron con el progreso de las exportaciones; los pequeños quedaron prácticamente al margen de sus ventajas. El proceso de esta progresiva marginación, que proseguirá y se amplificará durante el período posterior, revela una auténtica ruptura con la situación precedente.

En el pasado, el incremento de la demanda se traducía en una mayor presión que el comerciante-usurero ejercía, por medios coercitivos, sobre el pequeño productor. Como consecuencia de ello, tanto el gran productor como el pequeño quedaban implicados en la expansión, si bien los incentivos no eran los mismos.

Esta vez, en cambio, la expansión productiva y el surgimiento de grandes compañías mercantiles que actuaban con una lógica económica distinta a la del comerciante-usurero sólo constituyeron estímulos para los grandes productores, dejando en manos de aquél la producción de interés local y regional. El gran comerciante se desentiende de los productos que no tienen valor para la exportación y que no dan lugar a la importación de otros.

Las consecuencias económicas, pero también —y sobre todo— sociales, de esta mutación substancial acontecida entre 1850 y 1880 explican el progresivo desinterés de los grandes propietarios por los pequeños y por las comunidades indias; unos y otras, de parte integrante y complementaria del latifundio que eran hasta entonces, pasan a convertirse en elementos marginales. La expropiación de las tierras de las comunidades indias, sumamente rápida a partir de los años 1870-1880, es consecuencia, hasta cierto punto, de que su utilidad en la estructura productiva, al igual que la de la pequeña propiedad, ya no es la misma.

Así pues, cambian los comerciantes y cambian los criterios de comercialización, y este fenómeno, además de estimular la expansión del latifundio, crea las premisas para que el pequeño propietario y el indio de comunidad pierdan progresivamente el control de sus medios de producción. De este modo quedan asentadas las bases de su futura proletarianización.

Queremos hacer resaltar que este tipo de crecimiento económico aparentemente basado en la expresión de las exportaciones se propone, en la práctica, desencadenar un proceso que, mediante el desmantelamiento gradual de la economía campesina, otorgue al latifundio la función de centro de la vida económica. Sólo así es posible comprender por qué el aumento de las exportaciones se tradujo en un aumento de los ingresos para los grandes propietarios mientras que para los pequeños productores y las comunidades indias significó el punto de partida de un largo proceso de pauperización.

Al iniciar este apartado nos interrogábamos acerca de las modificaciones habidas durante este período por lo que respecta a los

mercados nacionales, que todavía no existían como tales hacia 1850. Creemos que lo expuesto hasta aquí muestra con bastante claridad que, en 1880, el mercado nacional aún no se ha formado en ningún país latinoamericano. En ninguna economía se observa un proceso que asigne a los recursos productivos la característica de ser mercancías como las otras. Lo que sucede, en cambio, es que sólo se convierten en mercancías los bienes susceptibles de ser exportados, los cuales, como antaño, son los únicos —o casi— que poseen un alto valor de intercambio.

Estamos pues en presencia de formas de mercado que toman en consideración, esencialmente, los bienes producidos para la exportación —es decir, para el mercado internacional— y nunca los factores productivos. Esta situación, si bien nos permite formular la hipótesis de un mercado unificado, pese a las posibles disparidades en los precios, nos impide hablar de la existencia de un auténtico mercado nacional, ya que solamente se tienen en cuenta los productos susceptibles de ser exportados y los productos importados.

La hipótesis que constituye nuestra conclusión es la de que la nueva inserción de las economías latinoamericanas en la economía internacional no desencadenó, durante el período 1850-1880, un proceso de formación de mercados nacionales. La ausencia de dicho proceso contribuyó a que el latifundio ocupara el centro de la vida económica, y facilitó, por consiguiente, la concentración de los beneficios originados por la expansión productiva en las manos de la clase propietaria de las grandes unidades productivas.

CAPITAL INGLÉS, ESTADO E INNOVACIONES ECONÓMICAS

Hemos afirmado más arriba que durante este período las exportaciones latinoamericanas tienden a aumentar con mayor rapidez que las importaciones. Un ejemplo bastante significativo lo ofrece Colombia, donde las exportaciones pasan de 1,60 dólares estadounidenses por habitante en el quinquenio 1850-1854 a 8,40 dólares en 1875-1879, mientras que las importaciones pasan, en el mismo lapso temporal, de 1,60 a 8 dólares. Cualquiera que sea el método adoptado, si se evalúan las balanzas comerciales de los países latinoamericanos durante estas tres décadas, la conclusión a que se llega siempre es la de que arrojan saldos positivos.

Si para dar una idea de conjunto de este fenómeno tomamos la balanza comercial entre América latina en su conjunto y Gran Bretaña, podemos observar que el saldo positivo favorable a la primera tiende a disminuir (4,5 millones de libras esterlinas en 1850; 2 millones en 1880) pese a que a lo largo de estos treinta años de esfuerzo productivo haya habido un notable incremento de las exportaciones (de 11 millones de libras esterlinas anuales en 1850 a 25 millones en 1880).

No hay que ver en este progresivo deterioro de las balanzas comerciales el comienzo de la tendencia al deterioro de la relación de intercambio, visible en el período siguiente. A partir de 1860, pero sobre todo en los años setenta, se registra un incremento de las importaciones de maquinaria —entre las cuales, obviamente, los ferrocarriles representan la parte más considerable—, incremento que provoca, por un lado, la reducción de los activos en las balanzas comerciales, y por el otro, una neta disminución de las importaciones de textiles y quincalla.

Un ejemplo de este fenómeno lo proporciona el comercio exterior del Perú con Gran Bretaña. Las importaciones de textiles ingleses se elevan durante la década posterior a 1860 a un millón de libras esterlinas anuales, y representan aproximadamente el 80 por 100 de las importaciones totales. Entre 1860 y 1880 podemos observar cómo las importaciones de textiles pasan del 80 al 60 por 100 de las importaciones totales y cómo disminuye incluso su valor absoluto, mientras que las importaciones de maquinaria progresan desde el 15 hasta el 25 por 100 del total y aumentan también en términos de valor absoluto.

De este modo, en las balanzas comerciales del período 1850-1880 encontramos dos elementos que representan, respectivamente, la continuidad y la novedad dentro de la evolución económica: los textiles y la maquinaria.

Los textiles siguen siendo, como en los tiempos coloniales, el principal artículo importado, pero tampoco ahora esta importación logra acabar con la producción artesana local, especialmente en las zonas rurales, y tras la expansión inicial —que de todos modos es menor que la de las exportaciones— tiende a estancarse. Dicho estancamiento significa que los textiles importados no conquistan una clientela suficiente y que la artesanía local logra recuperar la parte de mercado perdida en un primer momento.

Por lo que respecta a la maquinaria, el tema ofrece mayor complejidad. Entre 1850 y 1880 las economías latinoamericanas disponen de importantes recursos económicos, y sin duda es esta situación la que da tono optimista a los escritos económicos y políticos de esta época.

Estos recursos crecientes se deben tanto a que el volumen de mercancías exportadas aumenta como a que la relación de intercambio evoluciona favorablemente para América latina. Dicha evolución y las balanzas comerciales positivas constituyen los motivos específicamente latinoamericanos de la penetración del capital inglés en la zona.

No pretendemos negar, sin embargo, el papel de suma importancia que hay que atribuir al grado de desarrollo conseguido, en dicho estadio histórico, por la economía inglesa y por el conjunto de la economía internacional. Lo que afirmamos es que si la penetración del capital inglés fue tan rápida, ello se debió en parte a que ya había en América latina —en algunas áreas más que en otras— capitales acumulados gracias a los saldos favorables de las balanzas comerciales, factor que atrajo las inversiones.

La penetración del capital inglés contribuirá, junto con las innovaciones de que era portador, a facilitar la expansión de las exportaciones latinoamericanas. Ello significa que, si bien al principio la expansión no es imputable al capital inglés —cuya llegada es consecuencia, no causa, de la expansión—, éste desempeña a partir de 1870-1880 una función de apoyo sumamente importante desde el punto de vista cualitativo. En efecto, la penetración del capital inglés está estrechamente relacionada con la aparición, en América latina, del ferrocarril, los barcos de vapor, el telégrafo, el teléfono, los bancos, las compañías de seguros, las nuevas técnicas mercantiles. Estas innovaciones son concretamente indicadas en los cómputos realizados sobre el capital inglés acumulado en América latina.

En la primera fase (1850-1870) de la nueva inserción de las economías latinoamericanas en el mercado internacional, no se puede decir, pues, que el capital inglés tuviera un papel directo y tan importante como el que tendría después de 1880.

Si examinamos los cómputos sobre las inversiones inglesas acumuladas en América latina, vemos que pasan de 30,9 millones de libras esterlinas en 1840 a 80,9 millones en 1865. El aumento parece, a primera vista, considerable, pero si dejamos de lado los prés-

tamos a los gobiernos y consideramos exclusivamente las inversiones en ferrocarriles, servicios y bancos, las cifras se reducen a 7,5 millones en 1840 y 19,1 millones en 1865. En conjunto, y habida cuenta que se trata de inversiones acumuladas, no es un aumento que podamos calificar de importante para un período de veinticinco años. Basta añadir que 19,1 millones de libras esterlinas representan, en 1865, un valor inferior al de las mercancías latinoamericanas exportadas hacia Inglaterra durante este período para llegar a la conclusión que apuntábamos más arriba: en el momento de la reactivación productiva, el capital inglés ejercía una influencia que sin vacilar calificamos de marginal.

Pero el haber mostrado que el capital inglés no constituye un elemento decisivo en la reactivación productiva posterior a 1850 no equivale a afirmar lo mismo de la economía inglesa. Esta, a través de su propia demanda interior —aumentada por la que generaba la actividad reexportadora—, se hallaba en condiciones de regular indirectamente la reactivación de las exportaciones latinoamericanas que se produjo a partir de 1850. En este sentido, la economía inglesa conservó, con todas sus características, el papel de primera importancia que había ido adquiriendo desde 1820.

Los cálculos realizados acerca del capital inglés acumulado entre 1865 y 1875 muestran que pasó de 80,9 millones de libras esterlinas en la primera fecha a 174,6 millones en la segunda; el ritmo de expansión de las inversiones comienza pues a acelerarse y llegará —pero sólo después de 1880— a un muy elevado índice de crecimiento. Si de nuevo sustraemos de los totales los importes correspondientes a los préstamos a los diversos gobiernos, hallamos que las cifras del capital directamente invertido en los sectores de servicios, comercio y finanzas ascienden a 19,1 millones de libras esterlinas en 1865 y 43,5 millones en 1875; el incremento es más rápido que en la etapa 1840-1865, pero aún no basta para condicionar la evolución de la producción.

Un método para verificar el peso del capital inglés en la economía de cada uno de los países de América latina consiste en tomar como referencia la más importante y significativa de las innovaciones que aportó: el ferrocarril. En Argentina, seguramente el país donde más rápido fue el desarrollo tanto del capital inglés como de la red ferroviaria, ésta superaba apenas el millar de kilómetros (exactamente 1.384) en fecha tan tardía como 1875, y no transportaba en

todo el año más que unas 600.000 toneladas de mercancías. Un ejemplo aún más preciso lo proporcionan las informaciones referidas a una de las más importantes líneas ferroviarias argentinas, el Ferrocarril Sur, que en 1866 conseguía transportar solamente el 21 por 100 de la lana que, procedente del Sur, llegaba al mercado Constitución de Buenos Aires. En México, donde la vía férrea aparece más tardíamente, el número de kilómetros construidos hasta 1875 es inferior al millar (662), y en 1877 el transporte por ferrocarril sigue siendo más costoso que por carro.

Los ejemplos podrían multiplicarse. La situación es, hacia 1870, similar en casi todos los países latinoamericanos: pocos kilómetros de vía férrea y transporte caro. El resultado es que sólo las mercancías más valiosas viajan en ferrocarril, mientras que las destinadas al mercado interior —más pobre— son enviadas, en su mayoría, por los medios de transporte tradicionales.

La innovación tecnológica, y por ende el capital inglés que la originó, contribuyó a reforzar el latifundio como elemento central de la economía de exportación. En cambio, se convirtió en factor de empobrecimiento y marginación para la economía campesina. Solamente se hallaba en condiciones de hacer frente a los elevados costes del transporte quien podía enviar grandes cantidades de mercancías; la consecuencia final fue que la economía campesina no latifundista quedó orientada, cada vez más, hacia el mercado interior.

De cuanto hemos dicho se desprende que el capital inglés, elemento no fundamental del desarrollo económico al principio, adquiere una relevancia cada vez mayor: a partir de 1870, la comercialización y los servicios, que en proporción creciente dependen del capital inglés, comienzan a apuntalar activamente la expansión de las exportaciones, acelerando así las transformaciones que se producen en los circuitos mercantiles interiores.

La rapidez con que se infiltra el capital inglés hace indispensable un análisis que evidencie los elementos que la favorecieron. No debemos olvidar que ya hacia 1825 había intentado penetrar en las economías latinoamericanas, pero dicha empresa se había revelado ruinosa en aquel entonces. Hay que considerar, en primer lugar, que pasado 1850 el capital inglés llevaba consigo las importantes novedades técnicas arriba mencionadas —lo que no era el caso en los años veinte—, y la clase propietaria que controlaba la cuasi totalidad de los recursos productivos percibía dichas innovaciones como

un factor de refuerzo y no de debilitamiento; para la mentalidad de la clase dominante, las innovaciones técnicas representaban un incentivo favorable al proceso de expansión del latifundio y de las unidades productivas mineras.

Puede parecer un contrasentido que un factor nuevo, la técnica, se asocie con un factor del pasado, el latifundio, y lo fortalezca. Pero no existe tal contradicción, puesto que el latifundio —al menos en este período y hasta comienzos del siglo XX— no es en realidad un factor del pasado, sino un modo de organizar la producción que toma en cuenta las posibilidades objetivas y concretas para combinar los recursos naturales y las disponibilidades humanas. El latifundio no constituye un arcaísmo económico, y ello explica por qué las innovaciones económicas de esta época no lo destruyen. Fueron los mismos latifundistas quienes favorecieron las innovaciones aportadas por el capital inglés, sirviéndose del estado como elemento para estimular el proceso.

Al analizar la etapa 1850-1880, así como las siguientes, los historiadores no han dado suficiente importancia —en nuestra opinión— al hecho de que no fue sólo el capital inglés el que quiso difundir las innovaciones, sino que éstas fueron activamente solicitadas por la clase dominante, dispuesta incluso a hacer que el estado asumiera una parte considerable de las cargas financieras. El análisis de los préstamos obtenidos por diversos estados latinoamericanos confirman nuestras aseveraciones: la expansión de las inversiones inglesas en este período se debe principalmente al incremento de los mismos. Su importe asciende a 23,6 millones de libras esterlinas en 1840, y esta cifra comprende no sólo los préstamos concedidos anteriormente, sino también los intereses no pagados por los gobiernos deudores durante los años 1825-1840.

A partir de los años cincuenta, casi todos los gobiernos latinoamericanos deciden reconocer la deuda exterior de sus respectivos países y negociar su consolidación con el sindicato de acreedores, para poder recurrir de nuevo al mercado monetario en busca de más préstamos.

Algunos historiadores han demostrado que a lo largo de este período, y paralelamente a la consolidación de la deuda exterior, tiene lugar la reconversión de la deuda interior en exterior, operación de la que sacaron un moderado provecho los poseedores ingleses de títulos de la deuda exterior y un provecho enorme las oligar-

para un
historiador

guías nacionales, que habían llegado a controlar casi por completo la deuda pública acumulada tras las guerras de independencia. El reconocimiento por parte del estado de todos los títulos de la deuda pública interior significó transferir a la oligarquía un notable porcentaje de los crecidos recursos que a partir de 1850 entraron en las arcas públicas gracias a los aranceles que gravaban el comercio exterior en expansión.

Por este medio indirecto, la consolidación de la deuda interior vino a financiar a la clase dominante, con el fin de que se hallara en condiciones de no sucumbir una vez iniciada la penetración del capital inglés y la incorporación de la nueva tecnología. No nos parece casual que el retorno a la financiación exterior por parte de los gobiernos latinoamericanos se produjera dos decenios antes de la masiva introducción de nuevas tecnologías.

Poco sabemos, sin embargo, sobre la deuda exterior, salvo que a partir de 1880 tiende a aumentar con mayor rapidez que las exportaciones. Hasta 1880, el endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos, sin ser excesivo, alcanza valores superiores a los de las versiones directas. Dicho de otro modo, para atraer una libra esterlina, los estados latinoamericanos tuvieron que gastar al menos el doble mediante la financiación exterior —los préstamos obtenidos en el mercado monetario de Londres— y la concesión de subsidios indirectos a las oligarquías, que fue la reconversión de la deuda interior.

En este período, y aun más tarde, se observa que el aumento de la deuda exterior provoca la disminución de la interior. Debido a ello, las economías nacionales sienten el endeudamiento del estado a través de los envíos al extranjero para la amortización y pago de intereses de los préstamos. Así se evitaba gravar a la clase dominante, única que disponía de capital acumulado. En última instancia, no fue el grupo social en posesión de los factores productivos el que sufragó el proceso para atraer las inversiones inglesas; este peso recayó en todos los demás grupos, puesto que el estado pagaba los intereses de la deuda exterior mediante el aumento de los aranceles sobre los artículos exportados e importados.

Si la deuda pública cambió su financiación interior por la financiación exterior, ello no fue debido, como tantas veces se ha afirmado, a que las economías latinoamericanas carecieran de recursos ni a que la deuda exterior y las inversiones directas aportaran el com-

plemento de capital indispensable para hacer posible el esfuerzo productivo. La verdadera razón fue que se optó por una política económica determinada, conscientemente puesta en práctica por las clases dominantes.

La financiación interior y exterior de las innovaciones técnicas, que reforzaban la primacía del latifundio y de las grandes unidades productivas en el seno de la economía de exportación, constituía un expediente necesario: la progresiva reducción de los impuestos que gravaban directamente la producción —reducción llevada a cabo por la oligarquía en el poder— había dejado como única fuente de recursos para el estado los aranceles aduaneros, cuyo rendimiento no ofrecía, ni a lo largo de un mismo año ni de un año a otro, la regularidad por la que en cambio se caracterizaba el gasto público. La financiación exterior servía de mecanismo para compensar este desequilibrio.

Todo cuanto hemos expuesto revela con bastante claridad que, en el período tratado, la financiación exterior, el control del estado y las innovaciones técnicas son los nuevos mecanismos que contribuyen a reforzar los mecanismos internos —activos ya desde antes de 1850— para asegurar una continuidad al proceso de incremento de la producción de artículos destinados a la exportación, según requería la economía internacional de la época y particularmente Gran Bretaña, su pieza central.

POLARIZACIÓN SOCIAL

La imagen del período 1850-1880 que se desprende de los apartados precedentes es la de una economía en la que el predominio de los elementos tradicionales impidió que el esfuerzo productivo se tradujera en la aparición de un orden distinto.

La acción de los elementos tradicionales que acompañan todo el crecimiento económico de estos años se refleja también en la ordenación social, en el sentido de que ésta, en el último tercio del siglo XIX, no presentaba diferencias sustanciales con respecto a 1850. Lo cual significa que los frutos del enorme esfuerzo productivo de estos treinta años acabaron, en su mayor parte, en manos de la clase dominante, la oligarquía.

Tal afirmación contrasta radicalmente con las interpretaciones

de otros estudios, que sitúan el inicio de la modernización social en los años sesenta. Estas tesis mantienen, en substancia, que la expansión productiva, que favoreció preferentemente a las economías de la vertiente atlántica de América latina, puso en marcha un proceso migratorio que con su impacto en la estructura social empujó a la sociedad hacia su modernización.

Pero esta interpretación no toma debidamente en cuenta una serie de elementos que intentaremos exponer a continuación con el propósito de describir a grandes rasgos la estructura social de este período.

Hacia 1850, la población de América latina puede estimarse en treinta millones de habitantes, y en cuarenta millones treinta años más tarde. Este incremento demográfico, al igual que el que se había producido en la primera mitad del siglo, es fundamentalmente debido a la diferencia entre natalidad y mortalidad. El régimen demográfico que sirve de base a la ordenación social del período 1850-1880 no ha sufrido pues variaciones substanciales con respecto a la situación precedente.

Algunos ejemplos precisos ilustrarán el estado de la demografía latinoamericana y sus características.

Al examinar el índice de crecimiento de la población en el estado brasileño de São Paulo sorprende observar cómo entre 1772 y 1872 varía apenas, manteniéndose constantemente entre el 2 y el 2,6 por 100 anual, pese a que en términos absolutos el número de habitantes se multiplica por ocho, pasando de 100.537 en 1772 a 837.354 en 1872.

El caso de São Paulo posee, en nuestra opinión, un gran valor indicativo, porque no sólo es el índice de crecimiento demográfico el que presenta una sólida continuidad en sus valores durante un siglo, sino también los índices de mortalidad, natalidad y nupcialidad. Los únicos elementos discontinuos en esta demografía son el índice de ilegitimidad de los recién nacidos, que aumenta notablemente, y el fenómeno de la inmigración. Ésta es casi inexistente hasta 1875 y supone más de mil nuevos habitantes por año entre 1875 y 1885. Sólo a partir de esta última fecha la inmigración arrojará cifras de 100.000 nuevos habitantes por año o más.

El caso del estado de São Paulo puede parecer poco representativo, ya que permite argumentar que sin la abolición de la esclavitud no podía haber aumento de la inmigración. Así pues, por pru-

dencia, dirigiremos la mirada hacia áreas donde la esclavitud había desaparecido ya antes de que empezara la inmigración.

En Argentina, el índice de crecimiento demográfico entre el último tercio del siglo XVIII y el año 1857 se caracteriza también por su gran estabilidad, oscilando entre el 2 y el 2,7 por 100 anual como valores extremos; la población total pasa de 200.000 habitantes a 1.300.000. De 1857 a 1869 el índice aumenta hasta un 3,4 por 100 anual, lo que eleva el número de habitantes a 1.800.000. El censo de 1869 señala que el 12,1 por 100 de la población total argentina es de origen extranjero. Pero es sobre todo a partir de 1880 cuando se produce el fenómeno de la inmigración masiva; el saldo migratorio de Argentina saltará entonces de las 10.000-20.000 unidades anuales del período 1870-1880 a las 60.000-90.000 del período 1880-1890.

Ahora bien, si exceptuamos los casos de Argentina y Uruguay, donde la inmigración sirvió para paliar la carencia de mano de obra, el esfuerzo productivo fue llevado a cabo, por regla general, con el régimen demográfico tradicional. Ello induce a pensar que la cantidad de horas de trabajo exigida a cada productor debió de aumentar, y que toda la mano de obra sobrante antes de 1850 fue aprovechada a partir de esta fecha. Cuando esto no bastó, o cuando no existía mano de obra sobrante, se buscó el indispensable complemento a través de la importación de esclavos negros, o cuando tampoco esto fue posible, se hizo lo necesario para atraer una mano de obra servil, proveniente de China o de países latinoamericanos con mayor densidad de población.

La importación de estos tipos de mano de obra encaja también en lo que hemos llamado régimen demográfico tradicional. Desde antiguo, cuando la economía agotaba las posibilidades de reclutar mano de obra marginal o de aumentar la cantidad de trabajo exigida a cada productor, se procedía a los traslados internos de población, que actuaban como mecanismo para completar las necesidades; a dichos traslados se sumaba, en ocasiones, la importación de mano de obra esclava o servil. Tres de los principales países importadores de esclavos, Brasil, Cuba y Puerto Rico, importaron a lo largo de la fase 1810-1850, en pleno estancamiento económico, cantidades casi constantes de esclavos (353.000 durante la década 1811-1820; 449.000 en 1821-1830; 352.000 en 1831-1840 y 396.000 en 1841-1850). Ello significa que el mecanismo de la esclavitud encaja perfectamente en el régimen demográfico tradicional.

Que la importación de mano de obra servil constituye un complemento de las necesidades demográficas lo demuestra el caso del Perú, donde la expansión productiva que experimentaron el guano y el azúcar en las regiones costeras impulsó al país a abrir sus puertas a la inmigración asiática. Entre 1859 y 1874 entraron en el Perú 87.000 chinos, que fueron a engrosar la mano de obra de las haciendas azucareras del norte.

¿Qué representaron estos 87.000 chinos en el total de la población? Según el censo de 1876, constituían el 1,9 por 100 de los habitantes del Perú, porcentaje poco elevado y susceptible, como ya había ocurrido en el pasado, de desaparecer por la gradual fusión étnica.

La expansión productiva dependía asimismo, como ya hemos apuntado, de la capacidad de atraer mano de obra no utilizada hasta entonces y aumentar el rendimiento de la población activa. Los métodos tradicionales para lograr este último fin consistían en disminuir la retribución a los peones y en aumentar las prestaciones en el trabajo; en cuanto a la mano de obra no incorporada todavía al proceso productivo, se la atraía con el señuelo del colonato o mediante el anticipo de mercancías y dinero a cuenta del trabajo futuro.

La persistencia de mecanismos demográficos tradicionales tiene importancia como fundamento no sólo de las relaciones sociales de producción y de su continuidad en este período, sino también de la estructura social en su conjunto. Significa que no se ha producido ninguna mutación en la estructura familiar preexistente ni en las relaciones sociales más vastas en las que se encuentra inmersa la familia en la hacienda, en la plantación, en la aldea o incluso en la ciudad. La ausencia de cambios en las relaciones sociales favoreció el proceso de fusión étnica, el mestizaje, que se configura como una de las tendencias de fondo, plurisculares, de las sociedades latinoamericanas.

En los treinta años que examinamos, el aspecto más nuevo lo constituye quizá la aceleración del proceso de mestizaje. De un modo indirecto, lo prueba el hecho de que mientras la población total de países como México o Perú aumenta, la población calificada de «india» permanece estable. Dado que en estos países la inmigración es casi nula, una conclusión se impone, y es que el estancamiento de la población calificada de india corresponde a un aumento, tanto

en términos absolutos como en porcentaje del total de habitantes, de la población calificada como mestiza o mulata.

El único índice demográfico que arroja valores diferentes a los del período anterior es el de ilegitimidad, que experimenta un enorme aumento. Sabemos que en el siglo XVIII uno de los cauces más frecuentes de la fusión étnica es precisamente la ilegitimidad, y que ésta se da con mayor profusión en los centros mineros y urbanos; ello nos induce a pensar —pese a no disponer de datos seguros para este período— que las ciudades y las zonas de minería siguen siendo aún lugares donde se efectúa una intensa fusión étnica, e incluso que también en las áreas rurales se ha acentuado el fenómeno como consecuencia de la expansión del latifundio y la llegada de mano de obra venida del exterior. Tal es el caso de Venezuela, Colombia y Chile; y el de Río de la Plata antes de la llegada de los inmigrantes europeos.

Una de las consecuencias del mestizaje, fenómeno cuyos aspectos sociales predominan sobre los étnicos, fue la de uniformar a las clases populares en las zonas donde la población india era escasa; por el contrario, allí donde formaba un conjunto numeroso, la población india tendió cada vez más a constituir el campesinado, como ya había ocurrido, hasta cierto punto, en el período anterior. Esta creciente identificación de los términos «indio» y «campesino» es un aspecto de un fenómeno mucho más vasto: la marginación de la sociedad india con miras a favorecer la primacía del latifundio.

La persistencia de los elementos sociales tradicionales por una parte y la falta de sólidos factores de modernización social por la otra se hacen evidentes también en las relaciones entre campo y ciudad. Quien piense que el desarrollo urbano tiene un valor de modernización social en sí mismo deberá admitir, tras observar el de las capitales latinoamericanas entre 1800 y 1875, que no se produjo tal modernización en este caso. Resulta sorprendente comprobar que el ritmo de crecimiento de casi todas las capitales y los principales puertos antes de 1850 difiere poco del que experimentan entre 1850 y 1880. Sólo después de 1880 dicho crecimiento se efectúa con una gran rapidez.

Entre las ciudades que con mayor lentitud ven aumentar su número de habitantes se cuentan las ex-capitales de los virreinos: Lima (64.000 en 1812; 100.000 en 1876) y Ciudad de México (180.000 en 1810; 230.000 en 1877). También es poco considerable el incremento demográfico urbano en los países del Caribe: la

población de Caracas aumenta apenas (42.000 habitantes en 1810; 49.000 en 1873), y otro tanto se puede decir de Bogotá (40.000 habitantes en 1825; 41.000 en 1870). Algo distintos son los casos de Brasil, Cuba y Chile, países en los que el estancamiento económico anterior a 1850 no fue tan acentuado como en otros; el incremento demográfico de su población, importante a partir de 1850, no es sino la prolongación de una tendencia que ya existía: Río de Janeiro, con 113.000 habitantes en 1819, alcanza los 186.000 en 1854 y los 267.000 en 1872, evolución análoga a la que siguen La Habana, Santiago de Chile y Valparaíso.

De los citados ejemplos difiere Buenos Aires, que pasa de 38.000 habitantes en 1800 a 91.000 en 1857, y que a continuación dobla prácticamente esta cifra en poco más de un decenio, con los 178.000 habitantes en 1869. De nuevo es Argentina el país que se desvía de la norma, como anticipando una tendencia que a partir de 1880 será común a los demás países latinoamericanos.

Por lo que respecta al alcance del referido crecimiento, hay que decir que siempre está exclusivamente limitado a la capital y al principal puerto exportador, sin afectar a la totalidad de las ciudades. La aplastante superioridad numérica de la población rural es aún en este período, y también en el siguiente, el dato fundamental.

Fenómeno, pues, que afecta a pocas ciudades, el crecimiento urbano se explica, ante todo, por la expansión del comercio exterior y el consiguiente desarrollo de la red de servicios mercantiles, bancos y aseguradores, así como de la burocracia estatal. El cuadro que ofrecen las descripciones de capitales latinoamericanas de esta época dista de ser idílico: elevado índice de mortalidad, frecuentes epidemias de tifus, viruela, difteria y otras enfermedades... A comienzos del siglo xx, las epidemias de viruela todavía seguirán castigando a menudo la ciudad de Buenos Aires. En La Habana, el cólera, la fiebre amarilla, la viruela y el tifus aumentan sensiblemente el índice de mortalidad de ciertos años. En 1880, alrededor de 50.000 bonaerenses —un 18 por 100 de la población ciudadana— reside en conventillos, donde la gente vive amontonada, durmiendo diez en una habitación, violando las normas de higiene y la moral. Las ciudades resultan así más pestilentes que el campo que las circunda.

Más que como un elemento nuevo, las ciudades de esta época se presentan como una continuación de la estructura urbana ya existente. Sólo han cambiado el número de habitantes y la mayor abundan-

cia de ricas moradas pertenecientes a los hacendados, comerciantes y hombres políticos. La única industria que se implanta en las ciudades es la construcción: en Buenos Aires, la gran mayoría de los inmigrantes italianos, portugueses o españoles trabajan en este ramo como albañiles, carpinteros o peones. Idéntica es la situación en Río de Janeiro, São Paulo y Santiago de Chile, cuyos gobiernos respectivos, imitando a la clase dirigente, se dedican a construir nuevas sedes para el parlamento, los tribunales de justicia, los ministerios e incluso las universidades.

Sirviéndonos de los escasos datos disponibles, hemos intentado esbozar un cuadro de las diferencias que pueden haberse producido en las estructuras sociales a partir de 1850. Los resultados obtenidos indican que las estructuras sociales del período 1850-1880 pueden ser sintéticamente calificadas de feudales; en su seno, las relaciones entre los extremos —el señor y el subordinado— son de tipo mediano. Esta estructura polarizada presenta —como trataremos de mostrar a continuación— una serie de diferencias según los países y según las distintas regiones de un mismo país, y se caracteriza por presentarse en diversas formas y no en la misma siempre. Esta variedad de formas se da tanto en lo que concierne a las oligarquías como a los grupos sociales inferiores.

El haber llegado a la conclusión de que el crecimiento demográfico, el mestizaje y la relación entre campo y ciudad no experimentan ningún cambio profundo significa que los mecanismos tradicionales de esta sociedad mantienen toda su vigencia. Treinta años de expansión productiva y estímulos modernizantes no han bastado para descomponer la estructura social preexistente y provocar una mutación.

Sin embargo, sí se produjo un cambio significativo en la sociedad de este período, porque es entonces cuando empieza el proceso de pauperización de las capas sociales inferiores. A menudo se ha señalado que la expansión económica se tradujo para la oligarquía en un incremento de las rentas; que una vez descontados los gastos, el remanente monetario no sólo es importante sino que tiende a aumentar cada vez más. Las suntuosas moradas que los hacendados se construyen en las ciudades y la transformación de sus casas de campo en verdaderos palacios proclaman esta creciente prosperidad. En cambio, las indicaciones que nos llegan de los estratos sociales más bajos son de signo negativo, como las frecuentes insurrecciones campesinas

—sobre todo entre 1850 y 1870—, protagonizadas por indios (México) o por mestizos (Colombia).

Este malestar social de las capas populares afecta igualmente a la población urbana, como lo prueban las agitaciones de los artesanos de las ciudades. La situación a la que deben hacer frente los trabajadores es la de una reducción substancial de sus ingresos, consecuencia de la imposición de una jornada laboral más larga sin contrapartida económica.

En conclusión, el rasgo que caracteriza la estructura social del período 1850-1880 con relación a la del precedente es la recrudescencia de la polarización. Cada vez es más amo el amo y más servil la condición del peón, del colono, del artesano, de las capas populares en general. Se reduce progresivamente aquel margen de libertad de que gozaban en el pasado y que garantizaba el buen funcionamiento del sistema.

La expansión productiva hizo que se deterioraran las antiguas relaciones de producción gracias a las cuales la explotación de las capas populares por la oligarquía no era percibida como tal, ya que se escondía detrás de formas paternalistas y de dominación mediana. El período 1850-1880 señala el inicio de un irreversible proceso de empobrecimiento de las capas populares, que necesariamente desembocará en su proletarianización.

LA HEGEMONÍA OLIGÁRQUICA

Si se acepta la conclusión, expuesta en el apartado precedente, de la persistencia de una estructura social polarizada en todas las áreas latinoamericanas, cualquier descripción más detallada de dicha estructura social deberá empezar con el análisis de la clase dominante, la que hasta aquí hemos llamado con este nombre o con el de oligarquía, porque con relación a ella se definen y se caracterizan los demás grupos sociales.

En el contexto de los cinco primeros apartados, los conceptos de oligarquía y clase dominante tenían un contenido exclusivamente económico, por cuanto iban referidos a los poseedores de unidades productivas; en este sentido, también habríamos podido emplear los términos de clase propietaria para nombrar a la oligarquía. Hemos mostrado asimismo cómo, mediante la cesión de una parte de sus

rentas a los agentes del capital inglés en particular y del extranjero en general, la clase propietaria acaba teniendo participación en los sectores bancario y comercial. La diversificación de los intereses económicos de la oligarquía podría sugerirnos la idea de aplicarle el nombre de burguesía. Pero nos lo impide el hecho de que el núcleo de sus intereses permanece sólidamente anclado a la tierra y que, por lo tanto, sus ganancias no son provecho sino una renta, ya que el factor que las explica y las determina no es el riesgo. Dicho de otro modo, lo que caracteriza a la burguesía —la europea de 1850 a 1900— es el espíritu emprendedor, del que carece totalmente la oligarquía latinoamericana; ésta, que podría invertir en la industria, busca a través de sus inversiones una renta fija y no un provecho. La oligarquía de este período está cortada por el mismo patrón que la del siglo XVIII; como entonces, constituye una clase dominante agraria.

Pero no son las explicaciones de índole económica las que nos harán comprender las características de la clase dominante latinoamericana. Una serie de ejemplos ayudan a captar adecuadamente la tendencia de fondo de la oligarquía, que es, como ya hemos dicho, de naturaleza moral: los mineros enriquecidos —chilenos, bolivianos o mexicanos— se convierten en hacendados ya en la primera generación. Esta propensión no es exclusiva de los mineros; la hallamos también en los políticos, y la política es, como demuestran las guerras civiles, una de las vías posibles para convertirse en hacendado.

A la fascinación ejercida por el latifundio no escaparon siquiera los comerciantes extranjeros. Éstos, cuando se enriquecen, son admitidos por cooptación en la clase dominante y se transforman rápidamente en hacendados. Las biografías de los Parish y los Bunge en Argentina, los Gildemeister en Chile y otros muchos dan fe de esta evolución.

La constante proyección de los grupos sociales emergentes hacia la hacienda no se explica en exclusiva por las cuantiosas ganancias que proporciona ni porque la relación campo-ciudad en este contexto social y económico sea favorable al primero. En nuestra opinión, la hacienda constituye el elemento básico a partir del que se organiza el poder social —y no sólo social— de la oligarquía, mientras que el resto —participación en los sectores bancario, comercial, etcétera— se reduce a mero complemento, pues únicamente la hacienda, al conferir dominio sobre los hombres, otorga aquel prestigio que nunca poseerá el comerciante.

El interés por la hacienda no es pues de índole estrictamente económica ni presupone un apego sentimental al campo; su naturaleza es mucho más profunda. No existe una diferencia fundamental entre el oligarca que posee varias haciendas, amén de participaciones en otros sectores económicos, y el que sólo es dueño de una hacienda; pero sí existe dicha diferencia fundamental entre un oligarca y un comerciante, aun cuando sus ingresos o sus fortunas sean similares. Ello nos permite precisar que el término se revela como verdadero sinónimo de hacendado es el de oligarca, y no el de *gentleman-farmer*, como creen los viajeros ingleses de la época.

El que la clase dominante sea una clase rural tiene enormes repercusiones sociales. La más importante es que el modelo a partir del que se desarrolla la relación entre clase dominante y las demás capas sociales es el de la clientela, basado en el binomio *patron-client*. La subordinación del mundo urbano al rural queda patente en la persistencia de dicho modelo de relación en las ciudades. Basta con recordar la costumbre que guardan los hacendados peruanos y bolivianos de hacer venir de las haciendas el servicio doméstico.

El mecanismo clientelar, sobre el que aún faltan estudios concretos, es el que permite el dominio incontestado de la oligarquía, tanto en el campo como en la ciudad. Se ha sostenido que la hacienda representa la célula de la vida social en su conjunto; al examinarla, se encuentran en ella los elementos que caracterizan el mecanismo clientelar. En las haciendas mexicanas, por ejemplo, la organización del trabajo es sumamente jerarquizada, y el personal se divide en dos categorías: empleados de confianza y peones. Los primeros, además de estar vinculados al hacendado por un contrato de trabajo oral, lo están también por lazos de compadrazgo, de parentesco social. Existe asimismo, siempre en las haciendas de México, una neta distinción entre los trabajadores permanentes —llamados reales— y los temporeros, hasta tal punto que a los primeros se les consideraba «hijos de la hacienda» y gozaban de una serie de privilegios.

Esta diferenciación en el interior del latifundio, reveladora de las discriminaciones sociales, se da también en un latifundio tan distinto en apariencia al mexicano como es el de Chile, donde la figura social del inquilino —a medio camino entre el colono y el peón— empleza a escindirse entre 1830 y 1870 para dar lugar a dos personajes tratados de modo desigual: el inquilino a pie y el inquilino a caballo; este último recibe mayor cantidad de tierra a cambio de sus jorna-

das laborales. Al mismo tiempo, se establece una clara distinción entre inquilinos —mano de obra permanente— y migrantes —mano de obra temporera.

En los países que todavía no han abolido la esclavitud, como Brasil y Cuba, la situación es semejante; aun siendo esclava, la mano de obra permanente recibe un trato más favorable que la complementaria, formada de colonos, braceros estacionales y aparceros libres.

Hemos dicho que la organización del trabajo es reveladora de la relación clientelar que existe entre el oligarca y quienes dependen de él. Los dos extremos de la estructura social, el hacendado y el peón, mantienen una relación de tipo mediato, no inmediato: la mano de obra está a las órdenes de los empleados de confianza, los cuales, a su vez, deben obedecer las del hacendado.

¿Hasta qué punto es lícito afirmar que esta relación clientelar funciona también en las ciudades? Los mejores estudios disponibles dan casi por descontado que la ciudad es moderna, o por lo menos que los aspectos arcaicos que presenta están en vías de extinguirse. Sin embargo, cuando intentamos averiguar cuál es la forma de organización más avanzada, la más moderna, hallamos que la constituyen las sociedades de socorro mutuo, entre las cuales las más potentes son las que agrupan a los artesanos. ¿Qué representan estas sociedades de socorro mutuo y los gremios sino una forma de autodefensa en las relaciones con los restantes grupos sociales y en especial con la clase dominante? A diferencia del mundo rural, el mundo urbano ofrece, aunque muy restringida, una posibilidad, si no de escapar a las relaciones clientelares, por lo menos de reducir su intensidad. Posibilidad, empero, limitada a las capas populares, que en su lucha para no caer bajo la dominación de la oligarquía y para evitar la pérdida de sus medios de producción consiguen crear formas de organización independientes del sistema clientelar.

Para los grupos sociales compuestos por los funcionarios, administrativos, empleados de banca y de comercio, la situación es muy distinta. Ellos no constituyen una clase, y el mecanismo que en cierta medida los coagula socialmente es precisamente el de la clientela, que, a diferencia de lo que ocurre con las capas populares rurales, tiene en su caso un carácter directo. Este tipo de relación se basa en la adhesión del empleado a las directivas del oligarca y en su aceptación, como valores propios, de los modelos de vida y de comportamiento que le ofrece la oligarquía. Por otra parte, no hay que

disociar el funcionamiento de la clientela como mecanismo social de su utilidad como mecanismo político; por el hecho de ser electores, los empleados, administrativos y funcionarios constituyen la base social que legitima el sistema político oligárquico.

El sistema clientelar aparece, por consiguiente, como el mecanismo gracias al cual la oligarquía consigue extender su dominio sobre el entramado social en su conjunto, a escala local, regional y nacional. La posición dominante de la oligarquía es consecuencia de su enorme poder económico, así como del poder político que determina su monopolio del estado. Uno y otro constituyen los elementos fundamentales de su hegemonía social.

Otro poder que la oligarquía tiene en sus manos es el poder cultural, del que se sirve para reforzar su preeminencia social. No hay que olvidar que hacia 1880 más de los dos tercios de la población total de cualquier país latinoamericano era analfabeta. Es más, si observamos el caso de Argentina veremos que aún en 1890, cuando su población es de 3,500,000 habitantes, solamente tiene 4,000 alumnos inscritos en las escuelas medias y 963 estudiantes en las distintas universidades. Similar, si no peor, es la situación en otros países latinoamericanos, más atrasados que Argentina en este aspecto.

El exiguo número de personas inscritas en las universidades y escuelas superiores demuestra que el acceso a la cultura está reservado a los retoños de la oligarquía, con lo cual, naturalmente, todos los cargos superiores del poder ejecutivo, legislativo y judicial permanecen en manos de la clase dominante, sobre todo en las áreas urbanas donde, como hemos dicho más arriba, existen tendencias que amenazan con destruir los lazos clientelares.

El aumento del poder social de la oligarquía, que corrió parejas con el empobrecimiento de las capas populares y la expansión del grupo compuesto por los empleados, administrativos y funcionarios, no se tradujo en una progresiva modernización de las estructuras de la sociedad, sino en una consolidación de las existentes.

Durante el último tercio del siglo XIX, la oligarquía vivió su edad de oro. Ningún veto obstaculizaba su hegemonía; ejercía su dominio sobre todos los grupos sociales, en el campo y en la ciudad, llevaba las riendas del poder político y del poder cultural sin oposición de ningún tipo, y, de acuerdo con el capital inglés, también las del poder económico. Sus moradas urbanas se habían convertido en verdaderos palacios, y lo mismo estaba ocurriendo con sus propie-

dades rurales. Nuestra impresión es que el momento de máximo esplendor de las oligarquías latinoamericanas no corresponde a la época colonial, cuando había mecanismos de poder que la oligarquía no manejaba a su antojo y que podían disputarle el predominio, sino al siglo XIX, y más concretamente, al período que tratamos.

Los mecanismos descritos, que garantizaban la dominación de la oligarquía sobre los restantes grupos sociales, no podían impedir, sin embargo, los levantamientos populares —como los que protagonizaron los artesanos durante el gobierno de Mosquera en Colombia—, de campesinos indios —como la guerra de castas en Yucatán— o de grupos oligárquicos dejados al margen —caso de la guerra civil de 1851 en Chile—. En estos casos, la represión no tardaba en manifestarse con la llegada del ejército. El gasto público destinado a las fuerzas armadas es en este período, como también en el precedente, muy elevado: se les asigna más de un tercio del presupuesto del estado, con el fin primordial de contentar a los diversos mandos regionales para que defendan al gobierno central como representante de todos los grupos oligárquicos del país y mantengan la *pax oligárquica*.

La imagen que hemos dado de la oligarquía es la de una clase que ejerce su supremacía en un contexto social sin contradicciones internas ni externas. Pero esta imagen encubre dos elementos de novedad, porque la oligarquía se caracteriza, en tanto que clase dominante, por dos fenómenos capaces, al menos en potencia, de dar origen a contradicciones: la diferenciación social y la diversificación económica entre sus miembros.

Dado que estos dos fenómenos se manifestarán en toda su plenitud pasado 1880, los analizaremos más adelante. Basta, por ahora, con precisar los conceptos. Llamamos diversificación social al proceso que hace que, en el seno de la oligarquía, convivan familias con muy distintos ingresos. Por diversificación económica entendemos la progresiva participación de la oligarquía, o de parte de ella, en actividades económicas no relacionadas con el latifundio, aunque siempre sin renunciar a éste.

Esta descripción pasa por alto las diferencias entre unas zonas de América latina y otras, diferencias que sin embargo existen indistintamente: la oligarquía mexicana parece muy distinta —y es más rica— que la del Paraguay; la argentina difiere de la chilena y es más cultivada; la brasileña no es igual que la cubana ni tan retrógrada.

Otrosí, tenemos la impresión de que el grado de hegemonía logrado por la clase oligárquica no es exactamente el mismo en todas partes. La oligarquía ecuatoriana de este período nos recuerda mucho más a la de 1800 que la argentina.

Y aún existe otro fenómeno que no debe subestimarse si se quiere averiguar las diferencias entre oligarquías: el del posible desplazamiento del área de mayor dinamismo en el interior de un mismo país. El caso del Brasil es sumamente ilustrativo, puesto que su reinsertión en el comercio internacional generó la prosperidad de la zona de São Paulo-Santos, dejando en segundo término la tradicionalmente más rica de Río y el nordeste, lo cual provocó repercusiones en la clase dominante, como lo prueba la mutación institucional del país, con el fin del imperio y la proclamación de la república. Ahora bien, este desplazamiento del área económica no provoca ningún cambio en la estructura: cambian los apellidos de los oligarcas, cambian los producidos, cambian formalmente muchas cosas, pero sobreviven los mismos modos de relación y convivencia social, de cooperación de los nuevos ricos por la oligarquía, de dominación oligárquica sobre las capas populares. Entre la oligarquía del café de São Paulo y la del azúcar del nordeste, las diferencias son más aparentes que reales.

Incluso en países que, como México, habían sufrido durante el período precedente las fechorías de Santa Anna u otros caudillos mientras la oligarquía parecía haberse eclipsado, el cambio es mínimo. El más importante se reduce a la sustitución de los uniformes militares por la ropa a la moda de Londres y París.

Lo expuesto hasta aquí patentiza la carencia de un fundamento histórico concreto de que adolecen las hipótesis que suponen la existencia de una burguesía en formación durante este período. Dichas hipótesis se basan, probablemente, en una interpretación del proceso de diversificación de la oligarquía, iniciado en este período. Pero, como veremos más adelante (capítulo 2, pp. 108 ss.), tal proceso no trajo como consecuencia la formación de una nueva clase que pudiera reivindicar la hegemonía social.

LOS GRUPOS SUBALTERNOS

En nuestros análisis, solamente hemos aplicado el término de clase a la oligarquía, e incluso para designarla a ella es demasiado moder-

no. Todos los componentes de la estructura social latinoamericana de estos años, salvo la oligarquía, resultan difíciles de definir; por ello, trataremos de esbozar representaciones aproximadas de los mismos.

Hacia 1850, las personas que no pertenecen a la oligarquía son: empleados en los sectores público o privado, artesanos de las ciudades, mano de obra urbana no especializada de origen rural, braceros y colonos del latifundio, pequeños propietarios rurales, habitantes de las aldeas y pueblos.

Pese a las apariencias, muchas circunstancias aproximan entre sí a estos grupos sociales: el resultar todos ellos de la fusión étnica que en estos años se acelera, el estar implicados en el mecanismo clientelar, el hecho de que aún no haya comenzado el proceso de diferenciación entre capas populares urbanas y capas populares rurales. Este conjunto de observaciones es el que nos mueve a calificarlos a todos de grupos subalternos, subordinados a la oligarquía hegemónica.

Sin embargo, estas analogías fundamentales no impiden establecer una distinción entre una minoría urbana, que trabaja en la administración pública y en los servicios —a la que por comodidad llamaremos el grupo de los empleados— y una mayoría de carácter predominantemente rural, aunque también comprende artesanos y mano de obra no especializada, que forma lo que llamaremos las capas populares. En el primer grupo está incluido un porcentaje de la población mucho menor que en el segundo, y el elemento que progresivamente tiende a diferenciarlo es que no se encuentra sometido, como las capas populares, a un proceso de empobrecimiento.

La posibilidad que tiene el grupo de los empleados de escapar al empobrecimiento gradual se debe a una serie de factores de índole económica, social, política y cultural que detallaremos más adelante. Conviene hacer resaltar, empero, un punto: pese a que se puede considerar a este grupo como el antecedente que dará lugar a las actuales clases medias, no desempeña todavía dicha función en este período. El grupo de los empleados recuerda más bien al que forman aquellos administradores conocidos como empleados de confianza que hemos mencionado más arriba. Para asegurarse de su lealtad, la oligarquía favorece al grupo de los empleados con un trato de favor en el capítulo económico y un *status* social muy superior al de las capas populares. Por este procedimiento, la oligarquía crea una división que propicia la fidelidad incondicional del grupo de los empleados a sus

intereses e instaure la primera diferenciación en el seno del grupo subalterno.

La característica más significativa del grupo de los empleados es, en este período, su crecimiento cuantitativo. La expansión productiva y el consiguiente incremento de los servicios comerciales, financieros y estatales, así como la incorporación de nuevas tecnologías, constituyen las causas determinantes.

La función que incumbe al grupo de los empleados en la estructura social es la de servir de intermediario entre la oligarquía y los restantes grupos subalternos. Pero pese al aumento numérico de sus miembros, no logra desarrollarse en tanto que grupo; su existencia depende de la voluntad de la oligarquía y del mecanismo que ésta ha creado para evitar que se haga autónomo.

Este mecanismo de subordinación es el clientelismo cultural y político. En el sistema electoral censitario imperante, el grupo intermedio recibe el derecho de ciudadanía y en consecuencia puede votar y —virtualmente— ser votado. Gracias a tal derecho, que abrirá nuevas posibilidades de crecimiento al grupo de los empleados, éste acaba sintiéndose parte integrante del sistema oligárquico. La oligarquía le ofrece un modelo cultural que imitar, impidiéndole así que desarrolle una identidad propia, dado que la máxima aspiración de los miembros de este grupo consiste en llegar a formar parte de la clase oligárquica.

La situación de los restantes grupos subalternos urbanos, en cambio, les lleva a un empobrecimiento cada vez mayor, que afecta sobre todo a los artesanos. Estos presentan una evolución que les transforma de productores independientes en productores agrupados en un taller común administrado por un comerciante o en simple mano de obra. Las razones de este proceso estriban en la reducción de los aranceles aduaneros —consecuencia de la política librecambista adoptada por casi todos los países— y en la necesidad de hacer más eficientes algunos servicios esenciales para el comercio exterior (reparación de barcos, etcétera). Para oponerse a esta tendencia, el artesano urbano —para quien su oficio constituye el único medio de vida, a diferencia del artesano rural, que combina su oficio y la actividad agrícola— luchará activamente, intentando vigorizar los gremios y cofradías, que en el pasado habían sido instrumentos útiles para la defensa de su autonomía, y desarrollando nuevas formas de organización, como las sociedades de socorro mutuo.

La falta de estudios pormenorizados sobre la evolución del artesano urbano constituye una gran laguna que nos impide conocer a fondo el funcionamiento concreto de las cofradías y las sociedades de socorro mutuo. Las primeras tenían, como características esenciales, las de establecer nexos con otros grupos sociales y de potenciar las relaciones entre los cofrades; por este conducto, acababan reforzando el mecanismo clientelar y el de reciprocidad.

Ante el empuje de las fuerzas exteriores que tienden a sumirlo en la pobreza, el artesano reacciona sublevándose y dando vida a asociaciones de un nuevo tipo, las sociedades de socorro mutuo, que son, en cierto modo, la versión laica de las cofradías, cuyo origen es religioso. Las primeras aparecen en los años setenta —aunque no alcanzarán su máximo desarrollo hasta el período siguiente— y reúnen, en un primer tiempo, a los más avanzados de los artesanos, como los tipógrafos.

De los restantes grupos populares urbanos es bien poco lo que sabemos. No obstante, da la impresión de que entre 1850 y 1880 se haya acelerado el proceso de instalación en la ciudad de campesinos que buscan escapar así a la presión a que estaban sometidos en el latifundio. La necesidad de brazos en el ramo de la construcción ofrece posibilidades de empleo a esta mano de obra no especializada, razón por la que dicho grupo aumenta sobre todo en las capitales y en los puertos, que son las áreas urbanas que más se desarrollan en este período.

Un grupo popular subalterno que, si bien podría ser asimilado en parte a los de las ciudades, posee determinadas características propias, es el residente en los centros mineros. Han llegado hasta nosotros descripciones de estos centros que nos recuerdan —tal vez por haber sido copiadas— a las que se refieren a la Inglaterra victoriana. Lo que sí parece fuera de duda es que el nivel de vida en las áreas mineras era, pese a los salarios aparentemente altos, extremadamente pobre, seguramente más que en las ciudades, como lo demuestra el índice de mortalidad más elevado. Con todo, las zonas mineras siguen siendo, como antes de 1850, polos de atracción demográfica.

El método empleado para abastecer de mano de obra los centros mineros puede ayudarnos a comprender el significado de las migraciones interiores en este período. Dicho método es el mismo en las minas chilenas, peruanas y bolivianas: el enganche. Consiste en atraer a campesinos y pequeños propietarios con deudas, los cuales, una vez

convertidos en mineros, quedan ligados a la mina por el mecanismo del endeudamiento. También en este caso el pasado colonial revela su permanencia en la estructura social de la segunda mitad del siglo xix. Desgraciadamente, no sabemos nada sobre la vida en las zonas mineras, por lo que nos resulta difícil comprender por qué es en ellas donde, a finales del siglo xix y a principios del xx, surgen las primeras organizaciones de la clase obrera.

Aparte de sus diferencias, los grupos populares de las ciudades y de las minas presentan también elementos comunes que les permiten limitar los efectos del empobrecimiento. El más significativo es, sin duda, la reciprocidad, que se manifiesta en el parentesco social —el compadrazgo— y en las relaciones de vecindad, presentes por ejemplo en el conventillo. Ni el compadrazgo ni las relaciones de vecindad son de origen urbano, sino rural, lo que indica claramente que los grupos urbanos no tienen una larga tradición.

El grupo de los empleados, los grupos urbanos y los grupos mineros representan un porcentaje exiguo de los grupos subalternos, cuya mayoría se halla en las áreas rurales. También para los grupos rurales conviene el uso del plural, puesto que existen, por una parte, campesinos integrados en el latifundio en grado variable y, por la otra, campesinos no integrados en el mismo (pequeños propietarios, aldeas, comunidades, etcétera).

Para dar un ejemplo concreto de esta diversidad nos serviremos de los datos disponibles sobre la zona central de México, concentrados en los que se refieren a la extensión rural del arzobispado de Ciudad de México, que en 1848 comprende 25 parroquias y 122.081 habitantes. De ellos, 86.881 (71,2 por 100) son indios, 14.919 (12,2 por 100) mestizos y 20.281 (16,6 por 100) son blancos. Observamos que los grupos sociales subalternos son pluriétnicos, conclusión válida para casi todas las áreas rurales de América latina. En las plantaciones cafeteras del sur del Brasil, por ejemplo, coexisten durante los años sesenta y setenta esclavos negros, colonos mestizos y aparceros suizos e italianos, en un contexto esencialmente servil del que no logran escapar ni siquiera los aparecos europeos.

Los datos sobre México central evidencian otro aspecto que ya hemos indicado como una de las más significativas características de este período: la aceleración de la fusión étnica en los estratos populares, que tiende a desdibujar gradualmente la línea divisoria entre el mestizo o el mulato claro y el blanco, provocando la consiguiente

eliminación del concepto colonial de «casta», que designa los diversos grupos étnicos no blancos. Sin embargo, esta paulatina fusión no significa una superación de los prejuicios raciales, cuya fuerza no disminuye, como lo demuestra el hecho de que los teóricos de la inmigración europea en Argentina hubiesen querido que ésta se compusiera de europeos del norte, alemanes e ingleses; sólo cuando tal deseo se demuestra irrealizable son aceptados los inmigrantes que provienen de la Europa mediterránea, considerados inferiores.

La etnia —y especialmente el color de la piel— sigue siendo, como en el pasado, uno de los elementos determinantes para clasificar a un individuo en tal o cual grupo social subalterno. Si consultamos la lista de las ocupaciones de una parroquia rural del estado mexicano de Hidalgo, las más frecuentes son: «jornalero, artesano, comerciante, arriero, tejedor, comerciante en pequeño, agricultor propietario y sirviente». Estas ocupaciones nos indican que se trata de una zona donde el latifundio no tiene un peso determinante; ahora bien, si nos fijamos en las personas clasificadas como jornaleros —la ocupación que detenta el último lugar en la escala—, comprobamos que constituyen el 34 por 100 de la población total y que se trata, casi en exclusiva, de indios.

De cuanto antecede se desprende que una de las más destacadas diferencias entre las capas populares urbanas y las rurales es que la etnia todavía constituye un elemento importante en las últimas, pero no —o poco— en las primeras.

En las áreas de ocupación económica más reciente, como en las fronteras con el indio de la pampa argentina, el sur de Chile, el norte de México u otras, los grupos sociales subordinados, si bien existen, presentan características mucho menos definidas. Las diferencias entre los miembros de los distintos grupos étnicos tienden allí, como en el siglo xviii, a tener una importancia mucho menor.

Respecto a las capas populares rurales, se plantea el problema de la utilización por parte de la oligarquía de las diversidades étnicas a fin de reforzar el tipo de relaciones *patron-client*. La fragmentación étnica de estos grupos subalternos podía ser utilizada para impedir que se creara una solidaridad más extendida.

En consecuencia, las relaciones entre los grupos sociales subalternos en las áreas rurales tienen un carácter también fragmentado; los elementos unificadores son la figura del oligarca, la relación clientelar instaurada desde la hacienda y las relaciones asimétricas de la

hacienda con los pequeños propietarios por un lado y con el poblado indio por el otro. Esta fragmentación no es en absoluto casual, sino que forma parte de un conjunto de disposiciones cuya misión es la de consolidar la hegemonía del oligarca y prevenir —mediante el buen uso de las divisiones étnicas o laborales— la posibilidad de una insurrección de los grupos subalternos, principal temor de la clase dominante, antes y después de 1850. Tal vez sea el empobrecimiento que afecta a los grupos rurales subalternos el motivo que impulsa a los oligarcas a desmilitarizar progresivamente a la mano de obra, que durante las guerras civiles del período anterior había sido encuadrada en las milicias y utilizada para combatir a un caudillo en nombre de otro.

Porque el empobrecimiento afecta tanto a los grupos populares rurales como a los urbanos. Las tierras de las comunidades indias no hacen más que disminuir, y para mantener una producción equiva-lente, los miembros de las mismas se ven obligados a aumentar su esfuerzo físico y a cultivar las tierras dejadas de lado hasta entonces por su escaso rendimiento. La cantidad de trabajo exigida a los braceros del latifundio por la misma retribución aumenta también, con lo que mengua lo que en términos modernos llamamos el salario real. Los pequeños propietarios se ven constreñidos, para sobrevivir, a depender cada vez más de la hacienda. Los únicos medios de que disponen los grupos rurales subalternos para escapar de la degradación de sus condiciones de vida son la rebelión o la huida hacia las ciudades, los puertos o los centros mineros.

No es mejor, a juzgar por los testimonios llegados hasta nosotros, la situación de muchas áreas geográficas colonizadas por españoles e italianos, o por suizos, alemanes o polacos. A pesar de toda una literatura empeñada en mostrar que los inmigrantes hicieron fortuna en América, que les resultó fácil enriquecerse, la realidad fue muy otra: se obligaba a los colonos a comprar los terrenos a precios exorbitantes, lo cual les dejaba enfrentados a tierras vírgenes sin disponer de un capital inicial. Podemos pensar que, probablemente, de cada diez colonias fundadas no más de una lograría sobrevivir a la usura de los proveedores, a la presión de los latifundistas, a la hostilidad de las autoridades locales.

En conclusión, mientras que a lo largo del período 1850-1880 los ingresos de la oligarquía aumentan al mismo ritmo que las exportaciones, los de los grupos populares subalternos tienden a disminuir

pese al recargo de trabajo que les es impuesto. Así se inicia su empobrecimiento, que abocará a un proceso de proletarianización, con la consiguiente toma de conciencia. El único grupo social subordinado que se libera del empobrecimiento paulatino es el de los empleados, por su función de intermediario entre la clase dominante y las capas populares.

ASPECTOS DE UNA CONTINUIDAD: LA GESTIÓN DEL PODER POLÍTICO

Una de las interpretaciones dadas al período de vacío político e institucional comprendido entre los años 1825 y 1850, conocido con el nombre de caudillismo, es la del retorno al orden colonial. En este sentido, los fermentos innovadores que surgieron de la movilización política del proceso de independencia acabaron siendo reprimidos, para dejar paso a un orden político e institucional hartado parecido al que precedió a la independencia. Estos fenómenos de regresión histórica, tan frecuentes —y no sólo en el pasado de América latina—, muestran que lo que se consideraba viejo y superado, casi un residuo histórico, puede reaparecer, impidiendo que las nuevas tendencias lleguen a consolidarse o, por lo menos, adulterándolas.

En los años posteriores a 1850, el orden tradicional todavía da muestras de una fuerte vitalidad. En definitiva, gracias a los mecanismos tradicionales las economías de América latina llevan a cabo su nueva inserción en la economía internacional y logran incrementar la producción destinada al comercio exterior. La misma vitalidad de los elementos tradicionales se manifiesta en la estructura social, puesto que las relaciones *patron-client* y la reciprocidad siguen siendo, como antes, los mecanismos sociales de base.

No cabe duda que esta acusada preeminencia de los elementos tradicionales en los campos económico y social tiene que dejarse sentir también en el ámbito de la política. Ello no significa que haya que postular una simple relación de causa a efecto entre las estructuras fundamentales de la evolución histórica, ya que el tradicionalismo económico y social podía ser corregido en la esfera política por una actitud de la clase dirigente no conforme a los moldes tradicionales. Políticos como los argentinos Sarmiento y Mitre, el mexicano Juárez, el chileno Lastarria o los colombianos Samper, por citar sólo unos cuantos, encarnan sin duda alguna cuanto hay de nuevo en la cul-

tura política latinoamericana de esta época. El influjo cultural que sobre América latina ejercen Europa y los Estados Unidos, así como la difusión de las corrientes literarias y políticas más extendidas mundialmente (romanticismo, liberalismo) e incluso de otras de menos resonancia, como el socialismo utópico, muestran que existían las condiciones para contrarrestar, al menos parcialmente, la fuerza de los elementos tradicionales.

Sabido es que ya en el período del caudillismo se encuentran defensores y difusores de las ideas liberales, pero solamente a partir de 1860-1870 el liberalismo se convierte en la ideología dominante, hasta tal punto que la oligarquía la adopta masivamente. Sin embargo, de lo antedicho no hay que concluir que las posibles rivalidades en el seno de la oligarquía tienen motivaciones ideológicas y que en tanto que clase dominante —más aún, hegemónica— la oligarquía puede, por razones de prestigio exterior, asumir un semblante artificioso en el campo ideológico y dar a los agentes del capital inglés, y extranjero en general, la impresión de una gran modernidad. La tesis del transformismo, que presupone una oligarquía de naturaleza conservadora y careta liberal, nos parece insostenible.

En nuestra opinión, el problema de la ideología de la clase oligárquica debe relacionarse con el contexto del poder político; en dicho sentido, puede afirmarse que en este período —también conocido como período de organización nacional— la oligarquía presenta, en tanto que clase, características similares al anterior. No creemos, pues, que el sistema político sufra modificaciones esenciales, aunque presenta aspectos menos personalistas.

Varios son los elementos que nos mueven a pensar que, pese a cualquier apariencia, existe una substancial continuidad entre la política anterior a 1850 y la posterior a esta fecha. Tal vez el más importante sea la pervivencia de la clientela, cuyas características ya hemos descrito desde el punto de vista social, y que en el ámbito de la política se manifestaba, durante el caudillismo, en la adhesión a determinado caudillo local y, por consiguiente, a otro regional y a un tercero nacional. Obviamente, se trataba de una triple adhesión indirecta, por cuanto el individuo se limitaba a apoyar al caudillo local, pero en definitiva respaldaba también a los otros caudillos vinculados con aquel que había recibido su sostén.

Una vez superada la fase del caudillismo e iniciada la de institucionalización y organización nacional, los elementos constitutivos del

sistema precedente no son eliminados, y el caudillo local se transforma ahora en diputado o senador. ¿Qué es lo que ha cambiado entre 1840 y 1880? El mecanismo clientelar de la adhesión funciona en el interior del mecanismo electoral, pero sin ninguna alteración fundamental de las relaciones, que siguen siendo de tipo personal.

Esta interpretación, que reduce el alcance de la modernización de la estructura política y estatal en estos años, puede suscitar numerosas dudas: ¿Por qué cambia la forma institucional si nada más ha cambiado? ¿Y qué representa, en definitiva, esta nueva forma institucional?

Las respuestas no deben buscarse, creemos, analizando los mecanismos de base de la vida política, dado que en ésta, fundada sobre la clientela y los vínculos personales, prácticamente no se han producido cambios; donde hay que rastrearlos es en las mutaciones de la propia clase dirigente.

Nuestra impresión es que el caudillismo, aparte de que conve-
nía a los intereses de los latifundistas al imponer un retorno al orden colonial, fue el resultado de una contienda entre grupos oligárquicos con distintos grados de prestigio y riqueza, en un intento por parte de cada uno, de imponer su voluntad al otro o a los otros. Las luchas entre la región de Concepción y la de Santiago de Chile, entre la sierra y la región de Concepción y la de Santiago de Chile, entre la sierra y la costa del Perú, entre el norte y el centro de México, etcétera, que la historiografía nos suele presentar como enfrentamientos entre tendencias federalistas y centralizadoras, son en realidad luchas entre grupos oligárquicos.

El origen de estos conflictos radica en las desigualdades económicas regionales que, provenientes de la época colonial, no habían hecho sino acentuarse tras la independencia, a causa de la casi absoluta inexistencia de una estructura estatal digna de este nombre. Hacia 1850, las luchas intestinas han dado ya al grupo oligárquico más fuerte una preeminencia sobre los restantes, aunque no una hegemonía total; por dicha razón, el caudillismo tiende a desaparecer como fórmula política nacional.

La superación del caudillismo, acelerada por el crecimiento económico y por la nueva posibilidad que tienen los grupos oligárquicos de obtener mayores ingresos sin recurrir a los fondos públicos, se debe también a que ningún grupo oligárquico regional es capaz de conquistar la hegemonía sobre los demás. El resultado es el progre-

sivo afianzamiento del principio de la representación de todos los grupos oligárquicos regionales en la gestión del poder político.

Ya en la década de 1840 se había dado un primer paso en dirección a este principio básico, mediante la figura que por comodidad llamaremos el caudillo nacional. La función de los caudillos nacionales consistió en actuar como mediadores entre los grupos oligárquicos opuestos, aunque sin garantizar una representación equitativa a todos ellos. Y fue precisamente esta necesidad de incluir a todos los grupos oligárquicos en la gestión del poder político lo que provocó la eliminación de los caudillos nacionales.

La desaparición del caudillismo como fórmula política —pero no como mecanismo de poder político, económico y social— no se produjo sin dificultades ni fue una operación indolora, como lo prueban los casos de Argentina y México, que indican hasta qué punto las fuerzas nuevas, progresistas, de este período se caracterizan por su precariedad aun en las zonas más avanzadas de América latina. Justamente fue en dichos países donde la superación del caudillismo generó guerras de dimensiones internacionales: la guerra del Paraguay en el caso de Argentina y la intervención francesa en el de México.

La eliminación del caudillismo a escala nacional planteaba la necesidad de equilibrar de otro modo la estructura política; así, de un mecanismo de moderación de tipo personal se pasó a un mecanismo de moderación de tipo impersonal. Esta mutación, cuya suma importancia intentaremos mostrar más adelante, significaba la creación del estado y de las instituciones que le permitieran funcionar. Los diversos grupos oligárquicos delegaban el poder político en el estado para que el principio de la representación equitativa y a escala nacional de todos ellos pudiera ser una realidad.

El instrumento jurídico encargado de dar una configuración precisa al principio de la moderación de tipo impersonal fue la constitución. Entre 1845 y 1860 proliferan las nuevas constituciones: Argentina, México, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela cambian las que ya tenían, mientras que en Chile, en 1860 y bajo la presidencia de Pérez, se dará total aplicación a la de 1833.

Brasil, donde la constitución de 1824 ya sancionaba el principio del poder moderador, constituye un caso aparte. Tal vez sea la capacidad del imperio de conservar las instituciones ya existentes, y por consiguiente todos los equilibrios sociales y económicos, lo que

explique por qué Brasil, a diferencia de Hispanoamérica, desconoció la fase del caudillismo a escala nacional.

El hecho constitucional, punto de partida de la organización nacional sobre bases institucionales y jurídicas, no constituye —como se ha venido diciendo— una pura y simple imitación latinoamericana de lo que se hacía en la Europa atlántica de entonces. De ser así, no se explicaría por qué Bolivia reforma su constitución siete veces en este período, y cuatro veces Venezuela, Colombia y Perú. Esta avalancha de constituciones sólo se explica por los varios intentos de los grupos oligárquicos en busca de un nuevo equilibrio que no altere, en ningún caso, los fundamentos del ya logrado.

Pero las nuevas constituciones no son el único indicador de la mutación que tiene lugar en el ámbito de la política. Hay que añadirle el esfuerzo de codificación que en este período realizan todos los países latinoamericanos. Dicho esfuerzo se traduce en nuevos códigos civiles, penales, comerciales, mineros, etcétera, que representan una innovación substancial, ya que tras la independencia había continuado estando en vigor el sistema jurídico de las potencias colonizadoras: en los países desgajados de la corona de España todavía subsistían la *Recopilación de leyes de Indias* y los códigos castellanos a los que ésta remitía. El hecho de que los efectos de la institucionalización se dejan sentir también en la esfera privada a través de los códigos civiles significa que los principios sancionados por las nuevas constituciones chocaban, de una manera o de otra, con las formas jurídicas preexistentes.

Del alcance de la organización nacional debería dar una idea la voluntad de las élites dirigentes de proporcionar al estado los instrumentos necesarios para extenderla sobre todo el territorio nacional. Si observamos con atención lo que sucede en el transcurso de los treinta años que estamos analizando, nos damos cuenta de que el estado sólo existe realmente en las capitales, mientras que en el resto del país la situación ha variado bien poco, salvo en la ya mencionada circunstancia de que, formalmente, los caudillos han dejado de ser tales. Nos hallamos, por lo tanto, en presencia de un estado puramente formal, con lo que la constitución no es sino un acuerdo entre caballeros que ven en el estado una especie de gran tribunal de honor, sin ningún poder real para hacer respetar las propias decisiones. Por ello, el estado es un instrumento en manos de la oligarquía, pero un instrumento, por decirlo así, contradictorio, que,

impulsado por las dificultades que encuentra para desempeñar la función a él encomendada, intenta aumentar su poder. En este sentido, el estado refleja en cierta medida la imagen de la ciudad: el primero, circundado por el poder de la oligarquía, directamente ejercido por ella; la segunda, rodeada de un campo hostil a las mutaciones que la ciudad quisiera imponer. La imagen de América latina en este período es la de un continente rural.

El reconocimiento de un poder de tipo impersonal por parte de la oligarquía introduce un elemento de contradicción importante, del que se aprovechó, aun sin darse perfecta cuenta en este período, el grupo de los empleados, que como hemos visto más arriba había crecido gracias al desarrollo de los servicios. Una vez que los grupos oligárquicos habían admitido la existencia del estado y de un poder central, tenían que admitir también que éste debía ser controlado, fiscalizado, sometido a vigilancia, para lo cual era imprescindible la creación de un parlamento nacional. Ahora bien, la existencia de un parlamento nacional obligaba a la oligarquía a asignar al grupo de los empleados el papel de electorado y a encontrar, al mismo tiempo, un medio para evitar que esta función política lo hiciese independiente de la misma oligarquía. Para alcanzar este doble objetivo, la clase dominante introdujo la relación clientelar en la esfera política nacional. De este modo logró soldar la ciudad con el campo y, así, subordinarla políticamente, con lo cual quedaba reducida la capacidad de acción autónoma del poder central. Esta soldadura ofrecía la ventaja suplementaria de que permitía contener las amenazas de eventuales insurrecciones del campo gracias a la utilización del grupo de los empleados como cuerpo de milicia.

Después de 1850 vemos los primeros tanteos de un estado que pugna por alcanzar una talla nacional y que se manifiesta sobre todo en su dimensión de poder central, situado en la capital del país, desde donde ejerce una acción de moderador entre las partes políticas y de dispensador de favores, utilizando el gasto público como instrumento para esta última finalidad. Mediante la creación de una clientela propia, el poder central conseguirá que entre sus defensores se cuenten no sólo los intelectuales, sino también los grupos oligárquicos de las regiones pobres, en especial las que todavía no han sacado provecho alguno del incremento de las exportaciones.

Gracias a estos grupos oligárquicos que sienten pender sobre sus cabezas la amenaza de la marginación y buscan un valedor, el estado

se irá consolidando paulatinamente. Una gran parte de cuantos están a su servicio como militares, magistrados o intelectuales provienen de dichos grupos oligárquicos de las regiones pobres. Tal es el caso de Sarmiento en Argentina y de Juárez en México, procedentes respectivamente de las regiones de Mendoza y Oaxaca.

Si el estado, aun no contando con el apoyo de todos los grupos oligárquicos, comienza a formarse poco a poco, ello se debe fundamentalmente a que no se configura como una fuerza debilitadora ni política, ni social, ni económicamente. En cambio, el estado consiguió poner término a la oposición que durante el período anterior había enfrentado a las tendencias llamadas federalista y centralista, las cuales, como hemos señalado en páginas precedentes, reflejan la distinta evolución, los retrasos y aceleraciones de las diversas zonas de América latina.

La creación de una organización estatal sirvió para eliminar la fricción entre federalistas y centralistas, pues al atribuir una dimensión nacional al territorio de la capital, ésta se identificó con la función moderadora del estado. Uno de los problemas que durante más de treinta años habían impedido la organización nacional de los países latinoamericanos quedaba resuelto de golpe, y ello era posible gracias al reconocimiento, por parte de todos los grupos oligárquicos, del poder central como moderador de sus discusiones, reconocimiento sancionado por la constitución y que explica una de las características esenciales de este período y del siguiente: la tranquilidad y la resolución por vía pacífica de los conflictos entre los diversos grupos oligárquicos.

El mismo unánime reconocimiento explica por qué ni en este período ni en el que le sigue se manifiestan todavía contradicciones dentro de la clase dominante en ninguno de los campos, económico, social o cultural. Se producen, sí, discusiones referentes a cómo abordar determinados problemas; y de la misma manera que antes de 1850 se produjo en el edificio oligárquico una fisura que puso a federalistas y centralistas frente a frente, después de esta fecha la fisura principal es la que deja a un lado a los conservadores-clericales y al otro a los liberales-laicos.

El hecho significativo es que tales discusiones de índole política, sobre todo la de clericales y laicos, podían producirse dentro de una misma familia sin que por ello quedaran lesionados sus intereses fundamentales. No se trata, sin embargo, de un reparto de papeles

instrumentalizado por la oligarquía, sino de una verdadera discrepancia ideológica y política, que se intenta resolver de modo que no haga mella en el prestigio y la fortuna. Los vínculos familiares —una vez más vemos los mecanismos de parentesco en acción— funcionan como elemento moderador en la vida política, a la vez que como elemento de recomposición del prestigio y la fortuna. También aquí, oculta tras el aspecto innovador —la difusión de las tesis liberales—, hallamos una importante faceta conservadora de la que los mismos exponentes más progresistas de la oligarquía no eran del todo conscientes.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA POLÍTICA

La división generada por la lucha política entre los grupos oligárquicos no era lo suficientemente trascendental para originar rupturas profundas en el seno de la oligarquía. Así pues, sólidamente establecida la condición de la oligarquía como clase hegemónica durante todo el período, su comportamiento —su actitud liberal o conservadora— dependía del distinto peso de múltiples elementos de índole no sólo política sino también económica y social. Entre los primeros, no sólo contaban las figuras propias del sistema político nacional, como los partidos y clubs políticos, sino asimismo componentes tales como la Iglesia, el Foreign Office inglés, la intervención de otras potencias europeas, e incluso la intervención política de otros países latinoamericanos. Es el conjunto de tales elementos lo que da una configuración precisa a la estructura política renovada.

La primera tarea que se impone es, por tanto, la de describir dichos influjos. Para llevarla a cabo, empezaremos por los elementos externos, especialmente los referidos a la situación internacional de los países latinoamericanos; analizaremos a continuación los elementos internos no institucionales —caso, por ejemplo, de la Iglesia—; por último, nos ocuparemos de los elementos de índole institucional, partidos y clubs políticos.

La nueva inserción de América latina en la economía internacional, su retorno a los mercados internacionales no como simple suministradora de determinados artículos y consumidora de otros, sino también como solicitante de créditos y necesitada de capitales extranjeros, no podía por menos de suscitar el interés de los países

dedicados a la busca de nuevos mercados o nuevas colonias. Y ello coincide con el momento en que cobran nuevo vigor en Europa las tendencias colonialistas, en suspenso durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX.

La Francia de Napoleón III desarrolla el mito de la latinidad católica para oponerse al expansionismo inglés. La ideología imperial francesa se extiende por América latina en forma de apoyo indirecto a la Iglesia y de intervención disfrazada en México, donde Francia impone como emperador a Fernando Maximiliano de Austria (1864-1866). El caso de México, donde la intervención francesa se presenta como un apoyo a la Iglesia —amenazada por la reforma de Juárez— y a las fuerzas políticas más tradicionales, evidencia el fondo colonialista y reaccionario de esta ideología de la latinidad católica.

Acaso incitada por el ejemplo francés, también España intentó, por medio de una absurda política revanchista, immiscuirse en los asuntos de los países latinoamericanos. En 1864-1865, la flota española, al mando de Pareja en un principio y de Méndez Núñez después, trató de imponerse en el Perú, so pretexto de defender a los súbditos españoles tras los malos tratos infligidos a algunos marineros de dicha nacionalidad. El resultado de la acción fue una extensión del conflicto, ya que Chile declaró la guerra a España en solidaridad con el Perú. La contienda culminó con los bombardeos de los principales puertos chilenos y peruanos —Valparaíso y El Callao respectivamente—, tras lo cual la flota regresó a España.

Más importantes que el hecho en sí fueron las repercusiones que la intervención española tuvo en la política interior de los dos países. En Chile, los años de la guerra contra España coinciden con un momento crucial, en que se produce una lenta superación del régimen autocrático vigente desde 1829 y se introducen paulatinamente los principios de moderación y de representación equitativa en la estructura política. En tales circunstancias, la amenaza exterior representada por los españoles hacía el juego al grupo oligárquico poco dispuesto a abandonar lo viejo por lo nuevo. Más graves todavía fueron las repercusiones en el Perú, que se hallaba, dos años después de la muerte del caudillo Castilla, en una situación de incertidumbre entre el viejo orden y el nuevo.

Distinta en la forma, y más incisiva, es la intervención de Gran Bretaña. Se ha discutido hasta la saciedad —y se seguirá discutiendo—

do— sobre si la actuación británica en América latina tuvo o no un carácter imperialista y en qué sentido. Algunos autores, ingleses en su mayor parte, han señalado, con toda pertinencia, que la documentación del Foreign Office no permite llegar a la conclusión de que la política de Gran Bretaña con respecto a América latina fuera imperialista; al contrario, el Foreign Office prohibió siempre a las autoridades consulares y diplomáticas que defendieran los intereses de cualquier firma británica en particular. Pero nuestra impresión es que no se ha dado la suficiente importancia al hecho de que las autoridades consulares y diplomáticas gozaban, por lo precario de las comunicaciones, de un amplio margen de autonomía; ésta se conjugaba con la escasez numérica del grupo dirigente latinoamericano y el resultado era que el personal diplomático de Gran Bretaña mantenía estrechos contactos tanto con los representantes del capital inglés como con los hombres políticos del país que les hospedaba. Tal vez fue la utilización informal de los agentes diplomáticos como *trait d'union* lo que facilitó una sutil y encubierta injerencia británica en la política interior de los países latinoamericanos.

A esta actividad diplomática y consular, asaz consistente habida cuenta de la mole de documentos conservados en el archivo del Foreign Office, hay que añadir la actividad informal que se realiza a través de la presencia, los consejos, las sugerencias de los representantes de los grandes bancos y sociedades de colocación de valores, encargados de vender en el mercado inglés los títulos de los gobiernos latinoamericanos. Basta con pensar en el valor político que podía tener un juicio positivo o negativo de la asociación inglesa de los poseedores de títulos extranjeros.

Las injerencias y las presiones ejercidas sobre la política interior de los países latinoamericanos no provenían exclusivamente de los países europeos, sino también de otros países latinoamericanos. Recordemos que, debido a la común herencia colonial por un lado y a la falta de interés de los gobiernos por el otro, las fronteras estaban mal definidas y su trazado no pasaba de ser aproximativo. Con la reactivación económica, que provocó una mayor ocupación del territorio, los países latinoamericanos descubrieron de repente la necesidad de establecer con mayor precisión las líneas fronterizas. La inexistencia de fronteras nacionales entre Brasil y Uruguay impulsaba a los latifundistas brasileños a usurpar, para dedicarlos a la ganadería, territorios que pertenecían a Uruguay. Pero este tipo de ocupación

ilegal no constituía una novedad; ya durante la época colonial, los *bandeirantes* habían logrado extender el territorio del Brasil en detrimento de los pertenecientes a España. Nada tiene de extraño, por lo tanto, que dicha práctica continuara después de 1850; la diferencia con el pasado estriba en que ahora surge el problema de las fronteras políticas, que sirven de pretexto ya sea para reforzar el proceso de organización nacional, ya para crear áreas de influencia, transponiendo al contexto latinoamericano los principios de la estrategia política y militar europea. Tal ocurre durante este período en el caso mencionado, por cuanto Brasil ve en la subordinación de Uruguay la vía de acceso al Río de la Plata y un medio para controlar económicamente este pequeño estado tapón.

Precisamente por problemas de confines estalla una de las más cruentas guerras entre países latinoamericanos. El Paraguay, bajo el mandato de Francisco Solano López, y aprovechando que Brasil estaba militarmente enfascado en Uruguay, intentó recuperar los territorios del Mato Grosso, anteriormente usurpados por Brasil. Con este fin, se dispuso a explotar la rivalidad existente entre Argentina y Brasil. Pero la realidad no se amoldó a los cálculos previos, y el Paraguay acabó teniendo que afrontar militarmente a Brasil, Argentina y Uruguay coligados contra él; el resultado fue que, tras una defensa heroica, perdió una buena parte de su población adulta. Esta guerra, llamada de la Triple Alianza (1866-1870), sirvió para que Argentina y Brasil se repartieran una considerable porción del territorio paraguayo.

En estos mismos países, la guerra desempeñó un papel relevante en la política interior. En Argentina, fueron las dificultades de la organización nacional las que empujaron al presidente Mitre a tratar de neutralizar a la oposición esgrimiendo el argumento de la amenaza exterior. En Brasil, tras la victoria, las fuerzas armadas obtuvieron un peso político mayor que el que hasta entonces les había correspondido. Los jóvenes oficiales de la guerra de la Triple Alianza serían, en lo sucesivo, los principales partidarios de la instauración de la república y quienes aportarían a la política las influencias, especialmente fuertes a partir de 1880, del positivismo de Comte.

Aunque sin degenerar todavía en guerra abierta —ésta no estallaría hasta 1879—, también entre Chile por una parte y Bolivia y Perú por la otra surgieron fricciones debidas a problemas de confines. El más espinoso era el de la frontera norte de Chile, indeter-

minada, que pasaba por el desierto de Atacama, rico en nitrato, producido capaz de suscitar la avidia de los países limítrofes y la intervención directa de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos en los asuntos internos de los tres países en liza.

Cada vez que se producen, las intervenciones extranjeras —sean de origen europeo o latinoamericano— actúan sobre las situaciones internas de los países afectados por ellas, de forma que éstas constituyen verdaderas cajas de resonancia que amplifican, más o menos según los casos, el alcance y la intensidad de aquéllas.

Las fuerzas políticas interiores, como la Iglesia, el ejército e incluso los clubs frecuentados por la oligarquía, tuvieron un papel importante en la evolución política de los diversos países latinoamericanos. Esta observación adquiere mayor trascendencia, sobre todo en el período que analizamos, si se considera que los altos dignatarios de la Iglesia y los mandos supremos de las fuerzas armadas eran, al igual que los miembros de los clubs mencionados, personas que formaban parte de la oligarquía. El papel desempeñado por estas fuerzas políticas informales, que reunían a individuos con idénticos orígenes, intereses económicos y modo de vida, tenía que ser fuertemente enorme.

Entre dichas fuerzas indirectamente políticas, era la Iglesia la que poseía una más larga historia, y fue también la que mayor influjo ejerció en el desarrollo social y político de América latina, ya que por su organización capilar llegaba hasta las áreas más recónditas del territorio y de la sociedad, hazaña imposible de realizar para el estado.

El carácter complementario de los poderes eclesiástico y civil hasta 1850 se explica por el hecho de que los gobiernos latinoamericanos habían heredado y conservado, junto con muchas otras instituciones y usos de la época colonial, el patronato, facultad por la cual los nombramientos de arzobispos, obispos y altos dignatarios de la iglesia los realizaba el Vaticano a propuesta de los propios gobiernos. La abolición del diezmo eclesiástico estrechó todavía más los lazos entre Iglesia y estado, en la medida en que la Iglesia pasaba a depender más que antes del subsidio económico que recibía del gobierno.

Esta sumisión de la Iglesia y su progresiva pérdida de poder económico y social hizo que madurara en su seno una gran nostalgia del pasado colonial, nostalgia que desembocó en una mentalidad ultra-

montana. La llegada de sacerdotes europeos, en gran parte provenientes de España y pasados a América latina para huir de los liberales, contribuyó a reforzar esta tendencia conservadora de la Iglesia, que se constituyó cada vez más en elemento de apoyo y estímulo a los grupos oligárquicos conservadores. Dicha tendencia arreció de un modo proporcional a la difusión —muy rápida a partir de 1850— de la mentalidad liberal entre las filas mayoritarias de la oligarquía.

Lo que para la Iglesia representaba una extraordinaria preocupación era que la propagación del liberalismo llevara aparejada una neta distinción entre ella y el estado. Esta distinción constituía una necesidad para el afianzamiento del estado oligárquico, al que la carencia de una estructura propia habría condenado a no poder hacer respetar los fines para los que había sido creado. Desde el punto de vista de la Iglesia, en cambio, separarse del estado significaba ver cómo disminuía la propia importancia al perder el monopolio que hasta entonces ejerciera sobre la instrucción, la asistencia hospitalaria, el registro civil, etcétera.

En estas condiciones, es fácil comprender que el antagonismo entre Iglesia y estado, que se perfiló con la difusión del liberalismo, encuentra su razón más profunda no tanto en esta circunstancia como en la organización del estado oligárquico, la cual es, a su vez, generadora de dicha difusión.

Se podría establecer la geografía de la lucha entre estado e Iglesia en la América latina de estos años. Nos percataríamos entonces de que en algunos países, como México y Colombia, la rivalidad Iglesia-estado culminó en guerras civiles, mientras que en otros, como Chile, Argentina y Brasil, si bien fue intensa no acabó en guerras ni en confiscaciones de bienes. Las guerras civiles de este tipo que conoció América latina no son, sin embargo, directamente imputables a la Iglesia, sino a la potencia de los grupos oligárquicos conservadores.

El conflicto entre Iglesia y estado tuvo consecuencias importantes para la estructura política naciente. Con respecto al principio de la separación, la oligarquía se dividió en dos bandos: los liberales, que lo propugnaban, y los conservadores, que lo combatían. Esta escisión, de la que dimanarían los partidos políticos, nos parece especialmente importante, ya que nos indica que el surgimiento de los partidos políticos no obedece a motivos de tipo social, étnico o económico, sino a discrepancias de índole política e ideológica. Este

hecho—del que tampoco hay que apresurarse a deducir la premienencia del momento político e ideológico—confirma que las contradicciones que oponen a los grupos oligárquicos no son tales, sino litigios de índole ideológica, susceptibles por ello de desaparecer a medio plazo. Y más adelante veremos cómo en el período siguiente, una vez que los grupos conservadores hayan aceptado también el estado oligárquico, dejarán de representar una oposición a ultranza y nada les impedirá formar a menudo gobiernos mixtos con los liberales.

La división de la oligarquía en una fracción liberal y otra conservadora no significa todavía que existan dos partidos políticos propiamente dichos, pero puede afirmarse que constituye la condición de su surgimiento en el período siguiente.

En países tales como México y Colombia, la lucha contra la Iglesia para imponer los principios del estado oligárquico se reflejó en las capas bajas de la población. Liberales y conservadores, con fuerzas equivalentes, no vacilaron en recurrir a sus clientelas respectivas, dando al conflicto ideológico una dimensión militar y popular. En Colombia, las guerras civiles entre unos y otros movilizaron a grandes masas, que más tarde, al no poder ser desmilitarizadas de golpe, sin traumas para el país, pasaron a engrosar la población marginada o las filas del bandolerismo, fenómeno generalizado en todas las áreas rurales latinoamericanas. Aunque la contienda llegó hasta la más apartada de las aldeas, la participación popular no era espontánea: los campesinos se alistaban en un bando o en el contrario según el latifundista al que les unían los vínculos clientelares.

La colisión entre estado e Iglesia presenta dos dimensiones, complementarias y no excluyentes: la político-ideológica y la militar y de participación popular. Precisamente su carácter complementario explica que este conflicto—sin duda el más importante de la segunda mitad del siglo XIX—presente al mismo tiempo aspectos modernos y aspectos tradicionales.

Hemos dicho más arriba que, aunque liberales y conservadores no son propiamente partidos políticos, constituyen la premisa que dará lugar a los futuros partidos conservadores y liberales. En este período, los puntos de encuentro informales de los grupos oligárquicos son los clubs políticos. A este respecto, no existe aún un punto en el que se efectúe la conexión entre estructura política institucionalizada y estructura política no institucionalizada.

Otra fuerza indirectamente política—por último—que contribuyó a dar una forma propia a la estructura política oligárquica son las fuerzas armadas. Éstas siguen teniendo un carácter no profesional, por lo que sus mandos superiores son designados por el poder político, que ha de basarse en la capacidad de movilización de cada uno. En otras ocasiones, el nombramiento es un expediente para proporcionar un retiro a un ex-caudillo o a un caudillo potencial.

Las únicas fuerzas armadas de América latina en vías de profesionalización son, durante estos años, las del Brasil. La precocidad de este país se debe tal vez a no haber pasado por la experiencia del caudillismo como fórmula política a escala nacional, lo que atraía al ejército a numerosos oligarcas en busca de un mayor prestigio social. Que los demás países latinoamericanos carecían de verdaderas fuerzas armadas lo demuestra el hecho de que los bombardeos efectuados por la escuadra española en el puerto peruano de El Callao y en el chileno de Valparaíso no encontraron respuesta bélica alguna pese a que nadie ignoraba que iban a producirse.

El objetivo del estado oligárquico con respecto a las fuerzas armadas consistió, durante este período, en neutralizarlas como fuerza política, para conjurar el peligro de que se opusieran a su fortalecimiento. Ello exigió un dispendio colosal: los gastos militares para mantener un ejército y una marina casi inexistentes fueron enormes, pero los justificó la necesidad de tener controlados a los elementos potencialmente destructores del orden oligárquico.

Entre medio de todas estas fuerzas de índole interior y exterior se consolidó lentamente el estado oligárquico. Fue, como hemos intentado mostrar y como ilustraremos a continuación con algunos casos concretos, un proceso sumamente trabajoso. La violenta rivalidad inicial tiende a disminuir paulatinamente hasta que de la diatriba y la injuria se pasa al diálogo y la colaboración entre los distintos grupos oligárquicos. Esta calma en el frente político constituye un síntoma de que los principios de moderación y de representación política equitativa para todos los grupos oligárquicos está dando sus frutos y logrando la progresiva superación de las viejas rivalidades. El mecanismo institucional que permite estos resultados es el parlamento, que, en su versión bicameral—la más frecuente en los países latinoamericanos—garantiza el control sobre el poder central y representa equitativamente los intereses regionales (Senado)

y los intereses de cada grupo oligárquico en proporción a su peso cuantitativo (Cámara de los diputados).

LA DIFÍCIL SUPERACIÓN DEL CAUDILLISMO EN ARGENTINA Y EN VENEZUELA

Hemos hecho numerosas alusiones a las disparidades regionales dentro de un mismo país para mostrar cómo, ya derivadas del pasado colonial, ya de la nueva inserción de las economías latinoamericanas en la economía internacional, fueron un factor importantísimo para perpetuar los antiguos mecanismos de dominación interna —y, por consiguiente, el caudillismo— y un elemento del desarrollo de la nueva dinámica política orientada hacia la afirmación del estado oligárquico.

Pero si bien la disparidad entre las regiones constituía un factor de frenado, su intensidad fue variable según el país y según la zona en que estaba situado. Si tomamos los casos de Argentina y Venezuela, observamos que los contrastes existentes en ambos países entre la costa —y más concretamente el puerto exportador— y el interior —la pampa argentina y los llanos venezolanos— eran casi idénticos, pero que en cambio no lo fueron sus respectivos ritmos de superación de la forma política tradicional.

Con el fin de mostrar el desfase de la evolución política de estos dos países, pasaremos por alto en esta ocasión tanto los elementos externos que condicionaron el proceso político de cada uno como los elementos históricos propios a sus respectivos pasados, pese a la importancia de tales factores.

En uno y otro caso, el arranque del proceso de organización nacional coincide con una circunstancia militar: en Argentina, la caída de Rosas por obra del general Urquiza (1852); en Venezuela, la guerra federal, también llamada de los cinco años.

La traducción del hecho militar en hecho político fue difícil en Argentina. Las resistencias de las regiones y de las clientelas fueron tan fuertes que la substitución de Rosas por Urquiza significó solamente un cambio de personas, pero no el primer paso hacia el orden que la oligarquía —especialmente la oligarquía liberal de Buenos Aires— deseaba. Inmediatamente después de la victoria, Urquiza había obtenido el apoyo de los caudillos regionales vinculados a

Rosas. Lo que iba a determinar las modalidades y fases que llevarán a la superación de la forma política anterior sería, en realidad, el pulso que sostuvieron la oligarquía liberal de la costa y los grupos oligárquicos del interior.

El pacto federal de 1852, suscrito en la pequeña ciudad de San Nicolás, establecía la convocatoria de una asamblea constituyente, la libre navegación fluvial y la distribución proporcional entre todas las regiones de la totalidad de los ingresos de la nación, cláusulas que presagiaban una rápida superación del caudillismo. Sin embargo, la constitución federal de 1853, elaborada por la Asamblea constituyente reunida en Santa Fe y aprobada por las regiones del interior, no satisfizo a la región de Buenos Aires, que al no poder esperar ninguna ventaja del federalismo redactó su propia constitución y proclamó su secesión de la Confederación del Río de la Plata.

Esta secesión, aunque acorde con la tradición centralista y liberal de Buenos Aires, no correspondía a los intereses de los latifundistas de la región, cuyo poder había aumentado notablemente durante los veinte años del gobierno de Rosas, tras la anarquía de las guerras de independencia y de las guerras civiles. La oligarquía porteña temía sobre todo que volvieran estas últimas, con sus inevitables y funestas consecuencias sobre la expansión en curso de las exportaciones laneras.

La existencia de dos gobiernos en el espacio geográfico argentino, el de Buenos Aires y el de la Confederación, no podía durar, dado que Buenos Aires era la ciudad que unía Argentina al mundo. En 1859 las fuerzas de la Confederación derrotaron a las de Buenos Aires, obligando a la provincia secesionista a firmar un pacto por el que se reconocía parte integrante de la Confederación y prometía jurar fidelidad a la constitución federal de 1853, como en efecto hizo en 1860.

El fracaso militar de Buenos Aires no comportó, sin embargo, su fracaso político. La situación de la Confederación era precaria, ya que la lealtad entre caudillos constituía su principal elemento de cohesión; el presidente de la Confederación, Derqui, tenía el apoyo de las oligarquías regionales de San Luis y San Juan; Urquiza las de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Mendoza. El nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, logró hacerse con el apoyo de los grupos oligárquicos de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba, amén

del de Buenos Aires. En 1861, tras una serie de conflictos interregionales —en parte fomentados desde Buenos Aires—, los ejércitos confederado y porteño se enfrentan de nuevo, mientras el de Urquiza, favorable a Derqui en un primer momento, opta por regresar a Entre Ríos. La victoria favoreció esta vez a Buenos Aires, y permitió a Mitre hacer prevalecer a los liberales en el nuevo parlamento y ser elegido presidente (1862).

La presidencia de Mitre (1862-1868) se caracterizó por la lucha contra los caudillos regionales (eliminación del general Vicente Peña, el Chacho, de Felipe Varela, etcétera) y contra las tendencias autonomistas de la región de Buenos Aires (representadas por el exgobernador Alsina). El refuerzo de las tendencias liberales en las provincias interiores fue el principal resultado político de Mitre, y a la larga favoreció el principio de máxima imparcialidad del poder ejecutivo, formulado por el mismo Mitre y que se manifestó en la federalización de la capital. En este sentido, la pacificación del país constituyó el preludio de la definitiva institucionalización de la vida política basada en los principios de moderación y representación equitativa de todos los grupos oligárquicos cuyo advenimiento definitivo tendría lugar durante la presidencia de Sarmiento (1868-1874).

El mandato de Sarmiento no hizo sino acentuar la tendencia política ya perfilada por Mitre: exterminio de los caudillos, comienzo de una organización militar más eficiente, consolidación de las instituciones del estado oligárquico mediante el promulgamiento de nuevos códigos, y particularmente del nuevo código civil.

En Venezuela, el período transcurrido entre la aprobación del principio de organización nacional y la definitiva victoria del mismo fue más largo. La guerra federal (1859-1863) no logró, pese a su duración, hacer que prevaleciera el principio del estado oligárquico preconizado por los liberales. La contienda terminó gracias a un acuerdo entre el viejo caudillo Páez, que había dominado la escena política venezolana durante toda una generación, y Manuel Falcón, jefe de los liberales. El acuerdo estipulaba la convocatoria de una asamblea constituyente, que se reunió en diciembre de 1863, redactó la constitución, declaró distrito federal a Caracas y nombró presidente de la república a Falcón.

Así daba principio un proceso encaminado a hacer reinar la paz entre federales y centralistas. Los primeros correspondían a las provincias interiores; los segundos, a la de Caracas. El acuerdo firmado

por los liberales —llamados los amarillos— y los conservadores —llamados los azules— significaba, después de una sangrienta guerra, la superación de la vieja rivalidad entre la costa y el interior.

Esta paz fue de breve duración. Los grupos oligárquicos más retrógrados, dirigidos por José Tadeo Monagas, deshicieron el acuerdo al deponer a Falcón, substituido en su cargo por Monagas. Tampoco éste duró mucho en la presidencia; en 1870 le derrocó el general Antonio Guzmán Blanco, antiguo vicepresidente del gobierno de Falcón.

El primer período de gobierno de Guzmán Blanco, llamado «el Septenio» (1870-1877), fue el momento en que se intentó dar vida al estado oligárquico, para lo que hubo que hacer frente a la oposición de la Iglesia, que combatió las leyes sobre el registro civil (1872) y la abolición de los seminarios eclesiásticos. A pesar del áspero conflicto entre Iglesia y estado —este último trató incluso de promover una escisión en el seno de aquélla— y de la cruzada que promovió el obispo de Mérida, no se llegó hasta el extremo de una nueva guerra civil, signo evidente de que la laicización del estado contaba con el apoyo de la mayoría de los grupos oligárquicos.

De este resumen se podría sacar la conclusión de que Guzmán Blanco fue el Mitre o el Sarmiento de Venezuela, lo cual, hasta cierto punto, es verdad. En Guzmán Blanco encontramos una versión muy moderada de Mitre y Sarmiento; a diferencia de los argentinos, no le fue dado obtener el amplio consenso de todos los grupos oligárquicos y, en consecuencia, tuvo que buscar un apoyo suplementario en las fuerzas armadas, que pese a su endebles técnica constituían un elemento fundamental para la estabilidad del gobierno y la creación del estado oligárquico. En tal sentido, la transición del caudillismo al estado oligárquico en Venezuela se lleva a efecto de un modo incompleto, al contrario de lo que ocurre en Argentina. Esto evidencia el desfase existente entre la evolución política de los distintos países.

La comparación de los casos de Argentina y Venezuela, alejadas geográficamente pero partícipes de una evolución histórica bastante similar, nos ha permitido hacer patentes dos aspectos que en el apartado anterior no habían quedado suficientemente analizados. El primero se refiere a la contraposición entre federalismo y centralismo; el segundo, al tiempo transcurrido desde que la constitución es aprobada hasta que verdaderamente se le da aplicación.

El conflicto federalismo/centralismo, más que constituir un problema de dimensiones ideológicas, disimula las discrepancias de los grupos oligárquicos en cuanto a la porción de poder político que debe corresponder a cada uno. De otro modo, no se comprendería cómo, después de treinta años en los que esta espinosa cuestión no puede ser solucionada, de repente, en menos de un decenio, los grupos oligárquicos llegan a un acuerdo. Porque tanto el pacto —dicho «entre caballeros»— que firman Páez y Falcón en la hacienda Coche, cerca de Caracas, como el de San Nicolás en Argentina, no son sino acuerdos entre grupos oligárquicos.

En ambos casos, la constitución consagra estos acuerdos, pero ello no equivale a la inmediata superación de un pasado formado por varias décadas de tensiones, habida cuenta que los grupos oligárquicos favorables a la unidad y al buen entendimiento constituyen una exigua mayoría. Sólo a medida que lentamente se va construyendo el estado oligárquico los sectores más retrógrados adoptan, primero, una actitud neutral y, más tarde, brindan su adhesión al proyecto.

Confrontando las evoluciones argentina y venezolana, de idéntica tendencia, es en estas diversas fases donde vemos surgir las disparidades. En Argentina, transcurren nueve años —de 1853 a 1862— desde que la constitución es promulgada hasta que la acepta la mayoría de los grupos oligárquicos; el mismo proceso, en Venezuela, duró sólo seis años —de 1864 a 1870—. Una diferencia similar se produce también en la fase siguiente, la que media entre la adhesión al estado oligárquico y la efectiva aplicación de sus principios: en Argentina, el período es de doce años —de 1862 a 1874, presidencias de Mitre y Sarmiento— mientras que en Venezuela se reduce a siete años, que corresponden al mandato de Antonio Guzmán Blanco.

¿Qué significa esta diferencia temporal? En nuestra opinión, la relativa rapidez del proceso de organización nacional en Venezuela, en contraste con su lentitud en Argentina, es imputable a la sangrienta guerra federal que asoló aquel primer país y por la que no pasó Argentina, donde las contiendas no alcanzaron tal envergadura. Ahora bien, a la rapidez del proceso en Venezuela se debe también el que el estado oligárquico adoleciera de una debilidad mayor allí que en Argentina. La lentitud sirvió en Argentina para que los grupos oligárquicos se decidieran progresivamente a dar su adhesión

espontánea, lo que redundó en un mayor poder y una mayor consistencia del estado oligárquico.

LIBERALES Y CONSERVADORES EN MÉXICO Y COLOMBIA

El conflicto entre estado e Iglesia obstaculizó en algunos países la formación del estado oligárquico. El choque fue más o menos violento según los países, y su intensidad refleja en cierto modo el grado de consenso de que disfruta el estado oligárquico en formación entre los diversos grupos de la oligarquía.

En la evolución de México sorprende comprobar que, antes de 1857, la clase dominante no fue capaz de extraer de entre sus filas una figura de caudillo nacional, como sí habían hecho las de Argentina y Venezuela. Sólo el general Santa Anna puede ser considerado *lató sensu* como tal, pero el mismo hecho de que fuera derrocado varias veces demuestra que el caudillismo, entendido como fórmula política para atajar las luchas interoligárquicas, no cuajó en México.

Un historiador mexicano ha sintetizado así el período inmediatamente anterior a 1850: «Entre 1821 y 1850 reinó la inquietud en todos los órdenes. En treinta años hubo cincuenta gobiernos, casi todos producto de cuartelazo; once de ellos presididos por el general Santa Anna. La vida del país estuvo a merced de divididas logias masónicas, militares ambiciosos, intrepidos bandoleros e indios relámpago. Los generales producían guerritas a granel para derrocar presidentes y gobernadores».

Esta descripción capta perfectamente los aspectos externos de la evolución política de este período, pero no explica sus motivos. A nuestro parecer, el principal estriba en el elevado número de grupos oligárquicos, con las consiguientes dificultades para llegar a un común acuerdo.

Lo mismo podemos decir de Colombia, con la diferencia de que en este país el caudillismo adoptó la forma de la dominación de un grupo oligárquico sobre los demás, estableciendo una autocracia con escasa capacidad para sostenerse.

En México, la superación de la allí incompleta fórmula del caudillismo se produjo poco después de 1850, cuando varios grupos oligárquicos confluyeron en dos grupos mayores: liberales y conservadores. Lo mismo ocurrió en Colombia. Esta convergencia, que a la

larga conduciría a una desaparición de las querellas internas de la clase dominante, provocó, a corto y medio plazo, una agravación de las mismas.

Con el Plan de Ayala (1854) se crearon en México las bases de la alianza entre los grupos oligárquicos partidarios del liberalismo que llevaría al general Álvarez a la presidencia de la república. Esta alianza posibilitó la convocatoria de un congreso constituyente que redactó la constitución liberal de 1857, la cual sancionaba la organización federal del país y la separación de Iglesia y estado, al mismo tiempo que abolía las manos muertas mediante la desamortización, acababa con los fueros eclesiásticos e instituía el registro civil. En un lapso de tres años, los grupos oligárquicos liberales —entre los que cabe distinguir por lo menos dos sectores: doctrinarios (como Juárez) y moderados (entre otros, Comonfort)— lanzan, casi simultáneamente a otros países latinoamericanos, el programa del estado oligárquico, que se anticipa en mucho a los mencionados al estatuir la separación de Iglesia y estado y el laicismo de éste.

Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, el proyecto de la oligarquía liberal se pone en marcha sin contar con los grupos oligárquicos conservadores, cuya fuerza es subestimada. Éstos, aglutinados por el liderazgo del general Félix Zuloaga y de Lucas Alamán, declaran no reconocer la constitución, lo que señala el punto de partida hacia un choque frontal. El resultado fue una guerra civil de tres años, desde 1858 hasta 1861.

El foso que separa a liberales y conservadores es mucho más profundo en México que en otros países. Los segundos contestan sin ambages la república y abogan por una monarquía centralizadora que gobierne sin parlamento, solamente rodeada de un consejo de estado restringido, nombrado por el rey. La posición de los conservadores, favorables también a la unión de la Iglesia y el trono, se cifraba en un simple regreso al pasado. Esto lo percibieron con claridad los liberales, que les apodaron «los Cangrejos».

Las posiciones de los grupos oligárquicos liberales que se identifican con el régimen republicano, con el federalismo y con el laicismo y las mantenidas por los conservadores monárquicos son totalmente inconciliables; el conflicto desemboca en una guerra civil, ganada por los liberales, a cuyo término se produce la intervención francesa de Napoleón III bajo los auspicios de los conservadores. Los franceses imponen el imperio de Fernando Maximiliano de Aus-

tría, que apenas se sostiene durante tres años (1864-1867) y se derumba bajo el peso de sus contradicciones, resumibles en un intento de aplicar un programa liberal con fórmulas conservadoras. Abandonado por los conservadores, Maximiliano es derrotado por los liberales de Juárez, quien restaura la república y la constitución de 1857.

El decenio designado con el nombre de «República restaurada» (1867-1876), que sella el predominio indiscutido de los liberales sobre los conservadores, se caracteriza por una gran confusión del cuadro político. Bajo la presidencia de Benito Juárez y, más tarde, de Sebastián Lerdo de Tejada, los grupos liberales comienzan a perder poco a poco el contenido ideológico que les había caracterizado en la fase de la «Reforma» (1857-1867), atrayendo así a parte de los conservadores. Al mismo tiempo, los conservadores, que ven su fortuna aumentada gracias a la desamortización promulgada por el estado liberal, se rinden a la evidencia de que éste, tan temido por ellos hacía poco, no lesiona sus intereses en lo más mínimo. De este modo, se registra una convergencia entre los grupos oligárquicos conservadores y los grupos liberales más moderados, como el de Porfirio Díaz, quien es elegido presidente de la república en 1876.

Durante la República restaurada se elaboran, pues, las condiciones que en el período siguiente —el porfirato— permitirán la total aplicación de los principios del estado oligárquico también en México. Pero a diferencia de lo que sucede en otros países, y debido a las relaciones excepcionalmente conflictivas entre liberales y conservadores, el proceso de institucionalización necesitó allí más tiempo.

Todavía mayor fue la duración del mismo en Colombia. Empezó con la victoria del general José Hilario López, en las elecciones presidenciales de 1849, sobre los ministeriales, como eran llamadas las fuerzas que habían gobernado hasta entonces. No en vano se habla, políticamente, de la generación del 49 como de una generación de intelectuales influidos por el liberalismo político francés e inglés que hasta la década de 1870 desempeñó un papel de primer orden en la vida política del país.

También en Colombia los grupos liberales impulsieron, en un plazo de tres años (1850-1853), la abolición de la esclavitud, la separación de Iglesia y estado y la creación del registro civil, poniendo las bases del estado oligárquico. Al igual que en México, las fuerzas conservadoras, esencialmente representadas por los grupos de Pasto, Antioquia, Tunja y Pamplona, se sublevaron; pero no tardaron en

ser derrotadas por los liberales, que tenían de su parte a las fuerzas armadas.

El fervor liberal de los grupos oligárquicos se extendió asimismo al terreno de la economía. Una de las principales realizaciones fue la abolición del monopolio estatal (estanco) sobre el comercio del tabaco, que proporcionaba al gobierno central un importante porcentaje de sus recursos totales. Si por una parte este gesto lo debilitaba financieramente, por la otra consolidó el apoyo de los grupos oligárquicos al estado, y los mismos efectos logró la drástica reducción de los aranceles aduaneros, que provocó un fuerte descontento entre los artesanos de Bogotá. La culminación del proceso fue, comprensiblemente, la redacción de una nueva carta constitucional, la de 1853, que institucionalizaba las reformas introducidas por los liberales entre 1850 y 1853.

Como los liberales mexicanos, también los colombianos habían ignorado en demasía a los grupos oligárquicos conservadores, a los que trataron de aislar con el apoyo de los militares. En Colombia fueron los propios militares quienes contribuyeron al bloqueo del proceso de institucionalización que tan a lo vivo se había iniciado. A este respecto, el golpe de estado de 1854 significaba una revancha de los grupos oligárquicos conservadores.

El período comprendido entre 1854 y la aprobación de la nueva constitución de 1864 se caracteriza, en contraste con el caso mexicano, por una serie de intentos para colmar el foso abierto entre grupos liberales y grupos conservadores. El punto en que la concordia era más difícil lo constituía la cuestión de las relaciones estado-Iglesia.

Durante el decenio que sigue a la promulgación de la nueva constitución, llamado el «Decenio Liberal» por los historiadores, se toman varias decisiones tendientes a reforzar los principios del estado laico. Ya antes, en 1861, los bienes de la Iglesia habían sido confiscados y vendidos a continuación, lo cual, como en otros países latinoamericanos, había redundado en un aumento del poder económico de la oligarquía.

Así pues, el estado oligárquico se hallaba, en Colombia, en una fase avanzada de su organización; pero una multiplicidad de elementos obstaculizaron la total consolidación del mismo. Entre los más destacados hay que mencionar las tendencias centrifugas de la oligarquía, que la impulsaban a apartarse del gobierno central y a no reco-

nocer de hecho el principio de la representación política equitativa de todos los grupos oligárquicos. La exclusión de algunos de éstos del poder político acabó bloqueando el proceso de consolidación del estado oligárquico, que no se reanudaría hasta los años ochenta, una vez restablecida la concordia entre los diversos grupos.

El proceso de creación del estado oligárquico en Colombia, aún inconcluso en los años setenta, se prorroga así por espacio de treinta años más, superando en extensión temporal al de México. Esta larga duración de los procesos mexicano y colombiano resulta de la división ideológica en el seno de la oligarquía; pero esta división ideológica es la capa que encubre las dificultades objetivas para garantizar una representación política equitativa a escala nacional a los numerosos y distintos grupos oligárquicos de cada país.

Por consiguiente, así como el principio de moderación se aclimata con bastante rapidez también en México y Colombia, el de representación equitativa encuentra una resistencia mucho mayor, y no se impondrá definitivamente hasta después de 1880, con el reconocimiento del derecho, por parte del poder central, a intervenir para garantizar el pleno respeto de dicho principio. El porfiriato mexicano es sin duda la más clara expresión de esta función a cargo del poder central.

VARIANTES DEL PODER MODERADOR: BRASIL Y CHILE

No es posible hablar del estado oligárquico sin hacer referencia al Brasil imperial, único país que no conoció el caudillismo como forma política nacional y donde el reconocimiento del poder moderador como principio de base del sistema político se produce —al menos en tanto que formulación constitucional— inmediatamente después de la incruenta proclamación de la independencia. Pese a tal precocidad, el imperio brasileño se presenta, hasta 1840, más que como un estado oligárquico propiamente dicho, como un caudillismo institucionalizado donde la figura del emperador arbitra las tensiones y los conflictos entre los diversos grupos oligárquicos.

Una serie de factores sociales y económicos moverán al sistema político a dar total aplicación al principio del poder moderador, que implica necesariamente que los grupos oligárquicos sean reconocidos como grupos de presión y que el poder central mantenga una es-